

RIT Nº : 142-2023  
RUC Nº : 1901233211-7  
MATERIA : Incendio y Desórdenes Públicos  
IMPUTADO : MAURICIO ANTONIO CRUZ CRUZ  
FISCAL : GUILLERMO HENRÍQUEZ GILBERTO  
QUERELLANTE : BRENDA TORRES MUNDACA  
QUERELLANTE : FRANCISCA SOUPER ABURTO  
DEMANDANTE CIVIL : BRENDA TORRES MUNDACA  
DEFENSOR : SANDRA BETANCOURT PINO

Concepción, ocho de abril de dos mil veinticuatro.

**VISTOS, OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: *Intervinientes.*** Que con fecha 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 de marzo y 1 del presente mes y año, ante la sala de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, constituida por las juezas doña María Paulina García Soto, doña Carmen Gloria Durán Vergara y doña Milena Andrea Ubilla Carvajal se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en causa RIT Nº142-2023 RUC Nº1901233211-7 seguida en contra de **MAURICIO ANTONIO CRUZ CRUZ**, cédula de identidad Nº11.984.982-9, nacido el 12.03.72, 52 años de edad, viudo, cuarto año básico, lee y escribe, trabajador de compra y venta metales, en situación de calle, en toma en el Hogar Carlos Macera de Hualpén, fijando para efectos de notificaciones el teléfono 923835684, representado por la Defensora Sandra Betancourt, siendo sostenida acusación por el Ministerio Público, representado por el Fiscal Adjunto Guillermo Henríquez Gilberto, la Delegación Presidencial de la Región del Biobío representada por Francisca Souper Aburto y el Consejo de Defensa del Estado representado por Brenda Torres Mundaca, último que además interpuso demanda civil.

**SEGUNDO: *Acusación.*** Que, el Ministerio Público y las querellantes dedujeron acusación en contra del acusado ya individualizado fundándola en que:

"Que, el día 12 de noviembre de 2019, a propósito del estallido social que afectaba al país, alrededor de las 15:40 un grupo de personas encapuchadas, comenzó a lanzar objetos en contra del Edificio de la Gobernación, ubicado en calle Aníbal Pinto Nº 442 de Concepción, frente a la Plaza de la Independencia de Concepción, para luego, un grupo dirigirse a las puertas de la Galería Alessandri, ubicada en el mismo lugar, forcejeando las puertas de la misma, las cuales se encontraban cerradas, y que dan acceso al Edificio de la Gobernación, oficinas de la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, Extranjería, Correos de Chile, otros departamentos de servicios públicos y de diversos locales comerciales, ubicados en el mismo edificio, es así, que tras vencer las medidas de protección, personas ingresaron tanto a la Galería, como a las oficinas de la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, entre ellos, el imputado MAURICIO



ANTONIO CRUZ CRUZ quien a las 15:49 horas aproximadamente, en el interior de las oficinas del primer piso, de dicha repartición pública, comenzó a mover papeles y otros elementos para combustionar, realizando acopio, de parte de ellos, en un mueble de oficina de la misma Secretaría, para luego, encender fuego a estos elementos acopiados, logrando generar llamas, que, finalmente, provocaron un foco de incendio en dichas dependencias de oficina del primer piso, el que se descontroló, generando un incendio declarado a las 15:56 horas, que consumió todo el mobiliario de dicho primer piso, causando daños de consideración, valuados en más de \$100.000.000, sin considerar la pérdida de documentación histórica irrecuperable, títulos de propiedad, levantamientos y procesos de regularización, referidos a inmuebles de toda la Región del Bío Bío y que, también, incluye documentación de la actual Región de Ñuble, que debió ser auxiliado para su extinción, por personal de Bomberos. Atendido, asimismo, que existía gran cantidad de manifestantes en la Plaza de la Independencia, este incendio fue apreciado, por al menos un millar de manifestantes que se encontraban afuera del edificio. Causando el incendio un enardecimiento de los ánimos de los mismos, exaltando el hecho de la quema de dicho edificio, ubicado estratégicamente en el centro cívico de la ciudad, siendo reconocido como una obra arquitectónica y de ejercicio del poder soberano, característico de la urbe, provocando, no pocos gritos, saltos y ademanes de la multitud, celebrando el hecho que presenciaban, generando aún más alteración y turbando gravemente la escasa tranquilidad y orden del lugar, dando paso a nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, e incluso impidiendo el accionar de Bomberos, causando la paralización de calle O'Higgins, principal Avenida de Concepción y eje de la ciudad, con imposibilidad de realizar transporte público, ni privado por la misma, y muy dificultoso el tránsito de peatones, ajenos a los manifestantes, así como, el cierre del comercio céntrico. Por otra parte, este hecho, genera en los vecinos colindantes del mismo, porque baste recordar que todo el Edificio de la Gobernación y la Galería Alessandri conectan calles Aníbal Pinto, Barros Arana, Colo Colo y O'Higgins, es decir una manzana completa del centro de Concepción, que no sólo tiene Servicios Públicos como los ya indicados, sino, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, locales comerciales y, más grave aún, edificios habitados de personas, el temor de propagación del incendio y afectación directa de sus vidas y pertenencias, y en una importante parte de la población de la ciudad y de la Provincia incertidumbre y temor ante el mismo, vislumbrando llamas y humo en el centro de la urbe, apreciadas personalmente o a través de los medios de comunicación, viendo arder un edificio icónico de la misma."

Los hechos precedentemente descritos, en concepto del Ministerio Público configuran el delito de Incendio y el delito de Desórdenes Públicos, previstos y sancionados respectivamente en los artículos 476 N°2 y 269 del Código Penal, en grado de desarrollo de consumados, perpetrados en calidad de autor de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N°1 del Código Penal y, atendido que estima que no



concurrer circunstancias modificatorias de responsabilidad, requieren se le imponga la pena de 15 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, incluyendo accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, más las costas de la causa, además de la incorporación de la huella genética del acusado en el registro correspondiente, según lo previsto en el artículo 17 de la Ley N°19.970, por el delito de Incendio del artículo 476 N°2 del Código Penal y la pena de 300 DÍAS DE RECLUSION MENOR EN SU GRADO MÍNIMO, incluyendo accesorias legales del artículo 30 del Código Penal, más las costas de la causa, por el delito de Desorden Público del artículo 269 del Código Penal.

El Consejo de Defensa del Estado si bien presenta acusación por los mismos hechos, persigue únicamente los que en su concepto configuran el delito de Incendio, previsto y sancionado respectivamente en el artículo 475 del Código Penal, en grado de consumado, perpetrado en calidad de autor de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N°1 del Código Penal y, atendido que estima que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad, requiere se le imponga la pena de 15 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, incluyendo accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, más las costas de la causa, además de la incorporación de la huella genética del acusado en el registro correspondiente, según lo previsto en el artículo 17 de la Ley N°19.970.

La Delegación Presidencial presenta también acusación por los mismos hechos, los que estima configuran el delito de Incendio y el delito de Desórdenes Públicos, previstos y sancionados respectivamente en los artículos 476 N°1 y 269 del Código Penal, en grado de desarrollo de consumados, perpetrados en calidad de autor de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N°1 del Código Penal y, atendido que estima que concurre la circunstancia agravante del artículo 12 N°10 del Código Penal, esto es "cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia", requiere se le imponga por el delito de Incendio descrito y sancionado en el artículo 476 N° 1 del Código Penal, una pena de 20 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO, incluyendo accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, más las costas de la causa, solicitando además, que se ordene la incorporación de la huella genética del acusado en el registro correspondiente, según lo previsto en el artículo 17 de la Ley N°19.970 y por el delito de Desórdenes Públicos, una pena de 540 DÍAS DE RECLUSIÓN MENOR EN SU GRADO MÍNIMO, incluyendo accesorias legales del artículo 30 del Código Penal, más las costas de la causa.

**TERCERO: Aperturas.** Que, el Ministerio Público señaló que en un primer momento se formalizó investigación por el artículo 475 N°2 del Código Penal, luego cuando ese tipo penal se derogó por la Ley 21.402, los hechos se recalificaron de conformidad al artículo 476 N°2 del mismo cuerpo legal, pues el edificio afectado se encuentra en un sector poblado del centro de Concepción además de encontrarse cerca de una galería comercial y de otros servicios públicos que se encuentran



alrededor, por lo que corresponde aplicar esta figura. Anuncia la prueba de que se servirá para acreditar los hechos, haciendo presente que al encartado sólo le imputan lo ocurrido en la repartición de Bienes Nacionales. Indica que no fue ese el único foco de incendio causado, pero demostrará que uno de ellos focos fue el ocasionado por el acusado, que probablemente se discutirá la idoneidad de las maniobras hechas por Cruz -juntar papeles y encender un fuego-, y el grado de desarrollo del delito, pero que ellos podrán probar el incendio de este servicio público, el que se descontroló y la conducta de éste en él. Por otra parte refiere que, en cuanto a los desórdenes, se podrá ver en un registro de un tercero denominado "el reportero del pueblo", quien incluso denomina la situación como "caos", lo que permitirá apreciar la situación del centro de Concepción, en calle O'Higgins y Plaza de la Independencia, lo que da cuenta del delito de desórdenes públicos y la agravante invocada por la Delegación Presidencial. Refiere que los efectos de este incendio se producen hasta el día de hoy, haciendo presente que aún no se ha ocupado la totalidad del edificio, lo que resulta relevante para la acción civil deducida por el Consejo de Defensa del Estado. Hace presente asimismo los medios de prueba que permitirán acreditar la participación del acusado, esperando que al término de este juicio se dicte veredicto condenatorio.

Que el **Consejo de Defensa del Estado** señala que se verán elementos particulares que colocan estos hechos en una situación excepcional, registro fílmicos, que podrán dar cuenta que el acusado participa del incendio en Bienes Nacionales. Califica que la prueba es excepcional pues, a diferencia de otros incendios ocurridos en el estallido social que quedaron impunes, en éste existen circunstancias que llevaron a identificar a Cruz Cruz como uno de los responsables del incendio del edificio de la Intendencia o Gobernación. Anuncia que podrá acreditar que el acusado pretendió distraer las indagatorias para efectos de dar con su identidad, sin perjuicio de ello se destaca el trabajo de la policía especializada que pudo dar con circunstancias y características específicas, zapatillas, vestimentas, tatuajes y mochila, que en este caso permitieron identificar al señor Cruz, lo que se pudo corroborar al tiempo de ingresar la Policía de Investigaciones al domicilio que éste mantenía en esa época. Por otro lado, al momento de los hechos, indica que habían personas trabajando al interior del edificio, pues no era solo una oficina sino que una manzana completa se vio afectada, un lugar de más de 1.000 m<sup>2</sup> por la acción de Cruz, lo que además se dio en un contexto de desórdenes que se desarrollaban en las afueras, perdiéndose documentación relevante para esta región y para la de Ñuble, con afectación emocional de los funcionarios públicos que se desempeñan en ese lugar por el actuar del acusado. Refiere que la pericia de la Defensa intentará instalar una duda sobre el origen del incendio y sobre si su representado es responsable como autor del incendio en los términos planteados por los acusadores, lo que ha sido ventilado por incidencia conocida por la Iltma. Corte de Apelaciones y por el Tribunal Constitucional, olvidando ese interviniente que hubo varios incendios por varias horas, en un espacio de más de 1.000 m<sup>2</sup>, por lo que su tesis de que hubo solo un incendio, es engañosa, por lo que se debe atender a la prueba de cargo que se rendirá.



En cuanto a la acción civil, señala que ella se ejerce en virtud de sus facultades legales, atendidas las consecuencias patrimoniales de los actos del acusado, lo que debió haberse representado en su oportunidad, existiendo relación de causalidad entre el accionar de aquél y su resultado, relevando que aún dicho edificio público no logra funcionar normalmente, reiterando la petición de condena en la acción penal, y el pago de los daños que ha demandado civilmente.

La **Delegación Presidencial** se adhiere a los alegatos precedentes, indicando que demostrarán los delitos por los que ha acusado y la participación punible del encartado, de acuerdo con el tipo penal que ha invocado. Que estos hechos se produjeron en un contexto de graves incidentes, destruyendo edificios que prestan utilidad pública y también de particulares. En ese tiempo, no solo albergaba la Gobernación, sino que diversas reparticiones públicas que dejaron de funcionar durante bastante tiempo, perdiéndose bienes materiales, títulos de dominio de esta región y la de Ñuble, afectando a los usuarios de esos servicios públicos. Anuncia la prueba que rendirá, la que servirá de base para un veredicto condenatorio, incluso de la agravante invocada, por cuanto los hechos se enmarcan dentro de lo que se llamó “estallido social” que afectaron el orden público, dando paso a enfrentamientos, impidiendo el accionar de bomberos, paralizándose las calles principales de la ciudad, con llamados a marchas y a desórdenes, causando daño a la propiedad pública y privada, todo lo cual hacía casi imposible la llegada de Carabineros, aprovechando el acusado esta situación en un momento en que regía un estado de excepción constitucional, todo lo que la lleva a reiterar su petición de veredicto condenatorio.

A tu turno la **Defensa** indica que gran parte de todos los hechos de la acusación describen el contexto de lo que pasaba por aquellos días en lo que llama estallido social, con diferentes manifestaciones, protestas causando daños y destrozos, provocación de incendios de locales públicos y privados. En el afán de buscar responsables esos daños e incendios se inician investigaciones, pues éste no es el único incendio, empero, estima que esto debe circunscribirse a lo que se atribuye al acusado en los tres momentos indicados en la acusación: a las 15:40 horas, en que se alude a personas encapuchadas entrando al edificio de gobernación; luego, a las 15:49 horas a personas que ingresan a las oficinas de la Seremi de Bienes Nacionales, entre ellas, el acusado, moviendo papeles, elementos para combustionar en un mueble de esa oficina y luego encender fuego, haciendo presente que se ve un video haciendo estas acciones y se enciende una llama, y que lo que deberá probar el Ministerio Público es que aquella persona provocó un foco de incendio en esas dependencias en el primer piso y que, a raíz de ese foco de incendio, se descontroló ese fuego, generando un incendio a las 15:56 horas, llegando los bomberos, causando los daños que se han indicado, por los que, incluso, se ha demandado civilmente. De acuerdo con esto, deberá probarse la participación, si se logra determinar que la persona de las fotos es de su representado, indicando que no fue detenido en situación de flagrancia sino que con posterioridad, por las fotos y videos de las personas que aparecen en ellos y sus características, principalmente, una mochila y



una polera, que es lo que marca el inicio de esta investigación, por lo que luego se da con su representado, contrastándose con ciertas fotografías que de él se captaron y una pericia de la señora Aldana, que habría indicado que esas fotos serían coincidentes con la persona de los vídeos. Como segundo aspecto no menor, lo fundamental es determinar si se logrará imputar la participación de este delito de incendio, esto es, si haber encendido esa llama era suficiente para concretar su dolo, su fin, de causar incendio, por lo que pide derechamente, la absolucón, pues sin perjuicio de lo que pudiera acreditarse por el Ministerio Público, en el delito de incendio imputado, se dice en la acusación que con estos elementos acopiados se logran generar llamas que provocan un foco de incendio en las dependencias el que se descontroló generando el incendio declarado a las 15:56, estimando que con la prueba que se rendirá por los acusadores y por la de ella, esto no podrá ser acreditado, porque nunca el acusado provocó un incendio. Alega que en esta clase de delitos, se requiere una pericia, anunciándose que hay una química que determinaría los focos de incendio, y que el Ministerio Público y las acusadoras contaban con una pericia de Bomberos que determina el origen de ese incendio, pero lo curioso es que no la ofrecieron como un medio de prueba, la que conocen por otra causa, por otra investigación de un incendio en el mismo edificio, pero no la incluyen en este juicio no obstante que fue el único perito que hizo la pericia en esa oficina de Bienes Nacionales, siendo por eso que ellos quisieron rendirla. Por lo anterior solicita la absolucón del acusado, desde que no se acreditará la participación y porque, en el tipo jurídico, los elementos que deben darse para este tipo de incendio, tampoco serán acreditados.

**CUARTO: Declaración del Acusado.** Que, el acusado informado de sus derechos, decidió guardar silencio.

**QUINTO: Prueba Rendida.** Que, el **Ministerio Público y las Querellantes**, a objeto de acreditar los cargos condujo a estrados, a los siguientes **testigos**:

- 1.- Leonardo Esteban Sierra Villalobos, cédula de identidad N°16152007-1.
- 2.- Carlos Alfredo Martínez Catalán, cédula de identidad N°13.134.692-1.
- 3.- Fernando Eduardo Salamanca Fredes, cédula de identidad N°11.698.947-6.
- 4.- Eduardo Felipe Ramírez Pérez, cédula de identidad N°16.006.863-9.
- 5.- Guillermo Eusebio Valdés Mendoza, cédula de identidad N°15.998.224-6.

Que asimismo depuso el **perito** Gonzalo Mauricio López Leal, cédula de identidad N°13.627.140-7, perito químico de Lacrim Concepción de la Policía de Investigaciones de Chile, quien dio cuenta de su informe pericial químico N° 254/019.

Que a través de dichas declaraciones se procedió a la incorporación de ciento trece (113) **fotografías** correspondientes a 1) Set de diez fijaciones fotográficas del sitio del suceso y hechos de acusación, 2) Set de dos fijaciones y capturas de pantalla de publicaciones abiertas de red social Facebook del club de artes marciales de Concepción "Club Real Evolución", 3) Set de dos fotogramas de publicación perfil





público de Facebook "El reportero del pueblo" del día 12 de noviembre de 2019, 4) Set de tres fijaciones fotográficas operativas del día 07 de noviembre de 2019, sector Tribunales de Concepción, 5) Set de tres fijaciones fotográficas operativas del día 04 de diciembre de 2019, sector céntrico de Concepción, 6) Set de cinco fijaciones fotográficas operativas del día 02 de enero de 2020, en la vía pública, afuera del domicilio del acusado, 7) Set de catorce imágenes y videogramas, contenidos en informe pericial planimétrico 47/020, Lacrim Concepción, 8) Set de veintinueve fijaciones y videogramas contenidos en informe pericial sección Sonido y Audiovisuales N° 62/2020, Lacrim Central, 9) Set de siete fijaciones fotografías, contenidas en informe pericial fotográfico N° 673/019, Lacrim Concepción, 10) Set de seis fijaciones fotográficas, contenidas en informe pericial químico N° 254/019, Lacrim Concepción, 11) Set de treinta y dos fijaciones fotográficas, contenidas en informe pericial fotográfico N° 311/020, Lacrim Concepción, dos (2) **láminas** correspondientes a Lámina 1/2, contenido en informe pericial planimétrico N° 469/019, Lacrim Concepción, que contiene un levantamiento planimétrico primer piso, ubicación georeferencial y ubicación general del inmueble Seremi de Bienes Nacionales, ubicado en calle Aníbal Pinto N° 442, Concepción, y áreas focales de incendio y Lámina 2/2, contenido en informe pericial planimétrico N° 469/019, Lacrim Concepción, que contiene un levantamiento planimétrico del segundo piso, un levantamiento planimétrico del tercer piso, del inmueble Seremi de Bienes Nacionales, ubicado en calle Aníbal Pinto N° 442, Concepción, y áreas focales de incendio, tres (3) **discos compactos**, cd con evidencia **NUE 5953354**, correspondiente a un video con pistas 1) 4555525\_20191112\_152923, 2) 4555525\_20191112\_153953, 3) 4555525\_20191112\_155023, 4) 4555525\_20191112\_160053, 5) 4555525\_20191112\_161123, 6) 4555525\_20191112\_162153, 7) 4555525\_20191112\_163223, 8) 4555525\_20191112\_164253, 9) 4555525\_20191112\_165323, 10) 4555525\_20191112\_170353 y 11) 4555525\_20191112\_171423, cd con evidencia **NUE 5953355** correspondiente a) un video del perfil público de Facebook "El reportero del pueblo" y b) <https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/11/12multitudinaria-marcha-nuevamente-desbordo-las-calles-de-concepcion.html>, evidencia **NUE 5953356** que contiene tres fijaciones fotográficas, evidencia material correspondiente a la **NUE 5970114** consistente en Una mochila color amarillo fluorescente con azul, inscripción "América Travel"; un par de zapatillas, bicolor celeste con negro, planta blanca, sin cordones, marca Puma; una polera blanca con negro, sin mangas con capucha negra, con un logo circular de color amarillo en el pecho, con la inscripción "CRE" con letras rojas, en la parte trasera un logo blanco con negro, con inscripción CRE Club Real Evolución; un cinturón de tela, color blanco, con hebilla negra; un anillo de color plateado; y un pantalón de buzo negro, con líneas blancas a ambos costados, marca Adidas, y a la **NUE 5970115** correspondiente a Un teléfono celular negro, marca Samsung, en buen estado, sin cargador y un teléfono celular, color gris, marca Samsung, en regular estado; NUE 5970115, como también se procedió a la



incorporación, mediante lectura resumida, de tres (3) **documentos** consistentes en 1) Ordinario DST N° 45/2019 AA, de fecha 29 de noviembre de 2019, de Comandante del Cuerpo de Bomberos de Concepción, don José Pedreros Moreno, que, además, contiene y se adjunta Planilla de concurrencia de Bomberos a emergencias en incendios de Tribunales de Justicia, Caja de Compensación Los Andes, Tienda comercial Homecenter Sodimac S.A, Oficina Ventas Aitue, Seremi de Educación, Sinfónica de Concepción, Banco Santander, Compin, ex Registro Civil, ex Liceo Balmaceda, Telepizza, comercial Tricot, Constructora Maipú-Paicaví, Seguros Liberty, Automotora Paicaví, Oficinas Udi, y Gobernación Provincial- Bienes Nacionales-Galería Alessandri, 2) Copia de libro de asistencia, mes de noviembre de 2019, trabajador Mauricio Cruz, Sociedad prestadora de servicios medioambientales Ltda. Preserva. Consta de dos hojas, 3) Oficio CGEC AF053(P) N° 12400/25/PDI, de fecha 06 de enero de 2020, de Comandante de la Guarnición de Ejército de Concepción, que da cuenta de registros de academias de artes marciales, sus instructores, y alumnos que solicitan permiso de artes marciales, desde el año 2011 al año 2019, que contiene copia de 39 páginas de registros y 4) Registro Estadísticas de Gendarmería de Chile, que da cuenta de ficha del acusado, Rut, nombre, ubicación, señas morfológicas y una fijación fotográfica del mismo.

Que el **Consejo de Defensa del Estado** además de lo anterior y, para efectos de la *acción civil* deducida, incorporó mediante lectura resumida el **documento** de tres páginas consistente en Ordinario N° SE 08-410-2020, de fecha 24 de enero de 2020 en el cual, se responde Requerimiento de Información sobre Gastos derivados de contingencia social, de Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Biobío al Sr. Ricardo Betancourt Solas Contralor Regional del Biobío.

Que la **Defensa**, a fin de acreditar su teoría del caso, además de compartir la prueba rendida por el Ministerio Público, presentó en estrados al **perito** Isaías Exequiel Candia Barrera, perito investigador de incendio de Bomberos de Concepción, quien depuso sobre su informe pericial de causa y origen de incendio de Bomberos, declaración a través de la cual se incorporó un set de dieciocho (18) **fijaciones fotográficas** del sitio del suceso contenidas en el informe pericial de "causa de origen del siniestro" del peritaje evacuado por el Cuerpo de Bomberos de Concepción, ORD/DST: 02/2020, de 07 de enero de 2020.

Todo lo que quedó consignado en el registro de juicio de conformidad lo establece el artículo 291 del Código Procesal Penal.

**SEXTO: Clausuras.** Que, tras haberse rendido la prueba, el **Ministerio Público**, en su alegato de clausura expuso que los puntos de discusión planteados por la Defensa, se vinculan, primero, con la participación del acusado, pero que con la prueba rendida, la declaración de los funcionarios policiales dieron cuenta de ella, quienes además informaron de un hecho azaroso como lo fue la presencia del encartado en la vía pública, una polera sin mangas y unas marcas distintivas, con lo que se determinó su posible participación en un fuego, encendido de la oficina de bienes nacionales. Que





ese hallazgo se hubiera producido allí y no antes, es significativo pues la prueba producida hasta ese momento no demostraba su participación, lo que permitió acreditarla con los otros antecedentes, tales como, videos, set de 29 fotogramas mejorado por Lacrim central, más imágenes del 7/11 obtenida en Plaza de Tribunales y en Mall del Centro, de los cuales se descubren cierta similitud en esta cicatriz y polera. Y de acuerdo con el informe de Valdés, en la primera fotografía del set 3, del plano general del Mall del Centro, al lado de Cruz Cruz, otra persona mantenía la mochila también blanco de interés. Y con las imágenes del 2/11, la distribución de la cicatriz y la polera, de acuerdo con los dichos de los funcionarios policiales y Aldana, dan cuenta de esta participación, a lo que se suma la morfología, la mochila que se observa en diversos días recuperada en el domicilio del imputado, al igual que el pantalón de buzo con el que se le vio el 7/11, unido al anillo del set N°14 visto el 7/11 e incautado de domicilio del encartado. Todo lo anterior unido, además, a las fotografías que se toman en la vía pública en un lugar cercano a su domicilio. Que las fijaciones fotográficas captadas en la vía pública, son tomadas en ese lugar, por lo que no requiere autorización para ello, y la tomada el día de su detención, lo fue con su voluntad, de manera que podría estimarse como una colaboración en la investigación, considerando su derecho a guardar silencio. En cuanto a si se provocó un incendio, indica que respecto de la figura acusada por ellos, la doctrina discute si el incendio es un delito de resultado, por lo que el bien jurídico protegido sería la propiedad en el artículo 476 o 477, o uno de peligro en el caso del artículo 475, lo que no es menor, pues si fuera de peligro abstracto, la mera ejecución de la acción realizada que ni siquiera es de “pegado fuego” como lo dice Labatut en la página 62, lo transformaría en un delito frustrado, ni siquiera es tentativa, lo que es relevante en cuanto a la calificación jurídica. Y si fuera de resultado, habría que ver la afectación a los edificios o muebles, lo que es relevante para la figura del N° 2 de artículo 476 pues estima que no es sólo una figura de resultado sino que de peligro abstracto, ya que se trata de un incendio en una población, pues se trata de un delito pluriofensivo: afecta la propiedad y la vida de otras personas. Que no es discutida la ubicación del inmueble: frente a la Plaza de la Independencia. De acuerdo con el testigo Martínez Catalán, arquitecto, es importante ese tipo de construcción, se trata de un ícono en la construcción, pues quieren demostrar que allí se ejerce poder, y es relevante pues se estableció como un lugar relevante: estaba en esa época la gobernación, SII, Tesorería, Correos de Chile, se conecta Colo-Colo con Aníbal Pinto y al paseo peatonal de Barros Arana. Inclusive había una tienda Hush Puppies, con oficina de abogados en el piso superior y también departamentos, lo que es importante pues se demuestra la figura penal acusada. En cuanto a que sea un delito de peligro abstracto, según la doctrina, basta la mera acción para la ejecución de comisión típica, lo que es importante para su desarrollo: o tentativa o comisión, y siguiendo a Labatut, el acusado según los videos exhibidos, en estas oficinas, juntó papeles y pegó fuego; y, por otro lado, además de lo anterior, el incendio como acto, se desprende de la voluntad del autor y lo que lo transforma en delito es que él ya no tiene control y ello se da porque el acusado no vuelve nunca más



al lugar, dejando entregado al azar, lo que pasaba con ese fuego, transformándose en incontrolable o ingobernable, quedando frente a este delito complejo, que es un delito de peligro. Cita en apoyo a sus argumentaciones, la sentencia en la causa Rol N°1128-2021 de la ICA San Miguel, del incendio de metro, en donde se analiza si se trata de un delito de peligro o de lesión, y en los considerandos 35 y 36 se dice que es de peligro abstracto. Desde otro punto de vista, fue un delito de resultado, y lo que debe estimarse es si los daños causados permiten la consumación. Y el segundo aspecto relevante del juicio es que: todos los testigos de ese interviniente, conforme al planimétrico, determinan el lugar en que donde se prendió fuego por el acusado, que es el punto 3 del área focal, lo que también se ve en las imágenes fotográficas incorporadas con López. Los funcionarios policiales señalaron que determinaron que ese lugar terminó completamente destruido. Y la discusión planteada por don Isaías (perito de la Defensa) se resuelve con la evidencia incorporada en el juicio, pues conforme al planimétrico, la vía de ingreso desde la Galería Alessandri al edificio de Bienes Nacionales, está al frente del área focal N°3, lo que es relevante porque respecto de la fotografía N°4, el perito dijo que la tomó de manera directa y en ella se puede apreciar, que por ahí, era un punto de entrada a Bienes Nacionales, siendo relevante que en un servicio público el perito señale que vio un computador y una impresora sólo en la foto N°6, sin embargo el Consejo de Defensa del Estado dio cuenta de la reposición del edificio, su traslado, en parte, a calle los Veteranos del 79, y dentro de la descripción de los daños, se da cuenta de los equipos computacionales, por lo que es extraño que solo en las fotografías que se le exhibieron hubieran algunos aparatos computacionales y que en ninguna otra dependencia, los hubiera visto. De hecho -agrega- el plano, en su primera página, de todas las fotografías que él incorporó, específicamente, la N°25 del Set 21, daban cuenta que frente al lugar que se determinó como área focal 3, se encontraban los locales comerciales afectados, y en esa foto 25, al fondo de la derecha se ven esos locales. Alega que si se ve todo el video, lo que se ve al fondo son las vitrinas de los locales comerciales en el plano, que la vía de ingreso está al frente de esos locales comerciales, y si podría haber sido otra oficina de similares características, estima que sí, y la gran duda que plantea la Defensa, son las acciones de Rosa Miranda, pues además de tratar de apagar el fuego puso mobiliario en la puerta para impedir el ingreso de otras personas. En la fijación N°6, que genera dudas -lo que reconoce como tal-, no se observa ninguna de esas cortapisas puesta por esa testigo, lo que se ve que hace en los videos, pero en las fijaciones no están. Que hay similitudes entre el video y esa foto N° 6, pero la posición de la mesa, al lado de una ventana, es diversa del escritorio, que está en el mismo sector, al frente del kardex que encendió el acusado, son distintas mesas, lo que se apreciará entre el video y esa fotografía N°6. De esa foto N°6, no se ve que nadie tomó la planta que está al lado del estante en donde puso los papeles Cruz Cruz, ni siquiera se ve quemado, no se ve en la foto 6. Y la puerta que allí se ve, se ve una puerta que es más ancha que la del vídeo: son dos alas de puerta a diferencia del video que siempre se ve un ala abierta. Y en la fijación fotográfica N°2 acompañada



por Isaías, se aprecian bomberos en calle Aníbal Pinto, a la izquierda de éstos, lo que parece ser una lata a diferencia de las fotografías que ellos acompañaron y el video 2, en donde se ve a los Bomberos derribando esos cierres que se ven botados. Lo que viene a continuación, es la vía de ingreso y los locales afectados en el incendio, que ellos establecen en el punto 3. Pero lo más importante es que don Fernando dice que el local por donde está esta vía de ingreso, que ellos determinaron que es el punto de ignición donde entró el acusado, es el local 23 pero se podrá apreciar que en la fotografía N° 2 que acompañó la Defensa, que el local comercial que está al frente a lo que quieren demostrar como si fuera la misma entrada, es el local comercial 22, esto es, hay más de 10 números de diferencia en la ubicación del local 13 y el local 22 que está al frente de lo que nos quieren hacer aparecer como si fuera la misma entrada lo que exhibió don Isaías. De la misma foto N°2 del vídeo de la Defensa, es el local 22, lo que quiere aparecer como la entrada de Cruz Cruz, tiene, si se mirara hacia Aníbal Pinto, se observa una primera columna de vidrio, una puerta de dos hojas y dos columnas más de vidrio, que es muy distinto a todos los videos mostrados en cuanto a la conformación de vidrios, lo que determina que no es la misma vía de ingreso y que no es la misma oficina. Lo que es relevante pues en su video N°8, minuto 15:49 del video, se ve el ingreso de Cruz, cuando éste enciende un papel, colocarlo sobre otros, pegar el fuego y luego abandonar. Que esos vídeos fueron analizados minuciosamente por testigo Ramírez Pérez, siendo relevante lo que ocurre con posterioridad, según el video N° 8, a las 17:00 según ese video, intenta apagar a las 16:01 este fuego la señora Rosa Miranda, pero luego sigue humeando y a las 16:01 horas, en particular, realiza todas estas acciones. Y en el video 9, otro aspecto importante, es que a las 16:03 otro sujeto deja un par de zapatos en ese kardex, abre la impresora, le saca el toner, lo guarda y como no le cabe, saca los zapatos y los deja encima del kardex, pero no se ve la impresora abierta en las fotos de la Defensa. A las 16:10 se ve que un sujeto levanta los zapatos y se ve que humea, lo que es relevante porque sigue humeando y que, a las 16:21, se ven llamas. En el video 11 solo se puede apreciar humo y que, de repente, resplandecen ciertas llamas en el lugar, y todos los funcionarios determinan que ese es el área focal 3. Y el testigo experto, determinó que hubo 4 áreas focales, lo señaló desde el punto de vista técnico, quien sí tuvo acceso a los antecedentes de esta investigación, a diferencia de don Isaías que jamás tuvo acceso a ella, salvo hasta la semana pasada. Y toda la demás prueba incorporada por el Ministerio Público va demostrando las diligencias que realizan. La evidencia material es coincidente con las del 7/11 y 12/11. Que también se determinó el origen de la polera, a qué escuela de artes marciales correspondía, lo que se determinó por los funcionarios policiales. Y se probó lo que hizo el acusado esos días, con el registro de asistencia de su trabajo, especialmente lo que realizó el 12/11/19, en que trabajó hasta las 12:10, por lo que pudo estar presente en este servicio público. Además, las señas morfológicas que tenía ya las presentaba con anterioridad conforme lo indicó Genchi. En cuanto a los daños causados, conforme evidencia N°2, se aprecia luego de ver una hora de video, un fuego en el mismo lugar que ellos señalan es el área focal 2



y 3 del planimétrico, y que sólo una hora y 7 minutos después pueden llegar los Bomberos a combatir, se ve el video y el desorden que existía en el lugar lo que es relevante, pues con la prueba N°6 del Ministerio Público, tan criticada, se puede determinar que ese incendio con esas llamas descontroladas, más la llegada de Bomberos, corresponde al tercer llamado, de acuerdo con la última página de ese informe, que corresponde a las 17:25 horas, quienes lo combatieron hasta las 21:34 horas. En cuanto a los anteriores llamados, es importante el oficio, pues el primero, conforme descripción del planimétrico, de los peritos, de los funcionarios dependientes de Bienes Nacionales y los policías, el sector de migración está a la derecha, que no es el punto de interés de este juicio, pero a pesar de ello, el perito de la Defensa, no realizó ningún peritaje ni lo estableció como punto focal. El segundo llamado, que es el principio de incendio de la gobernación provincial, no se trabajó por barricadas y no se ven carros. Solo a las 17:25 horas esos funcionarios pueden ingresar, y a las concurrencias 2 y 3 de ese oficio, que según el perito era no clasificado, él afectaba principalmente, a la gobernación provincial, y el último llamado, era un rebrote. Respecto del incendio propiamente tal, hay 10 anotaciones de carros que concurrieron a un incendio. Por lo que la discusión es si de acuerdo a los hechos indicados en la acusación, esto es que desde las 15:56 horas precisamente hay un primer llamado, como lo indicaron en la acusación, pues ellos dijeron que Cruz Cruz ingresó a las 15:40 horas, que a las 15:49 enciende o pega el fuego en la oficina del primer piso, que ellos determinaron como área focal N° 3, logrando generar llamas, reconociendo un error allí en cuanto indica la hora de provocación de un foco de incendio en dependencia del primer piso que se descontroló, lo cual es cierto conforme al video N° 2, pues con la secuencia que ha señalado se ve el descontrol de las llamas, y luego genera un incendio declarado a las 15:56 horas, siendo este el error, pues, el de esa hora, es el de extranjería, pero sí se generaron llamas, un incendio, que se descontroló, fue acreditado en este juicio y esa indicación de 15:56 no obsta a que se tenga por acreditada la participación de Cruz, pues se puede demostrar que éste inició llamas, las que nunca se apagaron, observándolas hasta las 16:24, pues en los videos analizados con Ramírez se ve qué pasaba con el humo de esos papeles. Otro antecedente relevante son las conclusiones del perito químico, pues se determinó que una de las áreas de ingreso de Cruz fue una de las áreas focales del incendio, incorporando también la foto 5 del Set 22, la que da cuenta del área focal y lo que se observa al frente es un acceso a la galería y los locales comerciales, coincidente con la foto N°25 del Set 21, que son los de la letra A del planimétrico 19. La participación está en el set 17, pues allí Valdés indicó las características usadas por la perito planimétrico para determinar la coincidencia de Cruz en esos tres momentos distintos, en tres lugares, todo lo cual permite sustentar su petición de condena respecto del delito de incendio. En cuanto a los Desórdenes Públicos, indica que ello se aprecia en el video 2, el que no fue exhibido, estimando que no se encuentra acreditado lo que ellos imputaron como desórdenes públicos.



Que el **Consejo de Defensa del Estado** señala que comparte las alegaciones del Ministerio Público sin perjuicio de la calificación jurídica hecha por ellos es distinta, refiriendo que estamos frente a hechos excepcionales, que ningún ente estaba lo suficientemente preparado para resistir caos, protestas en masa, enfrentamientos entre la autoridad y civiles que confundieron su derecho de manifestarse con la destrucción de la propiedad privada, pública, el riesgo a la integridad de los demás y la suya propia, que esta es una investigación excepcional que fue adoptada por Departamento de Control de Crisis de la Policía de Investigaciones, asumida en la investigación por la Brigada de Investigaciones Especiales, teniendo a 3 oficiales en estrados dando cuenta de su participación en diligencias de investigación, lo que señalaron contestemente que es sumatoria de indicios lo que lleva a indicar que el señor Mauricio Cruz Cruz ingresa el día y hora de los hechos de dependencias de Bienes Nacionales y premunido de un aparado apto para generar fuego enciende papeles, transcurriendo minutos e interviniendo otras persona para apagar el fuego, lo que no ocurre, sigue humo y destrucción y el video se va a negro, luego conocen la destrucción total, la oficina más afectada es la de regularización, el testigo Carlos Martínez habló de la robustez del edificio, que tiene otras oficinas conexas, unas con otras, edificio construido tras el terremoto de 1939 que en esta región dejó consecuencias desastrosas. Reitera la excepcionalidad de la investigación, destacando el profesionalismo de las policías y el trabajo interdisciplinario realizado por el personal encargado de captar sujetos de interés, relevando que funcionarios de la Bipe dieron cuenta en estrados los pasos para dar con la identidad del señor Cruz y el trabajo que hace Lacrim de Policía de Investigaciones a través de pericias de planimetría, que los oficiales de caso tenía conocimiento, lo que fue refrendado por el perito químico, persona con amplia experiencia en el área, en todo tipo de incendios, no solo en espacios cerrados sino también producidos en sectores de violencia rural, todos estos funcionarios coincidieron en considerar que es extremadamente difícil obtener resultados positivos y determinar la existencia de un responsable no estando en situación de flagrancia, como otros incendios que tuvieron lugar en servicios públicos de todo el país. Señala que las teorías de todos los intervinientes fueron enunciadas en las aperturas, estimando que se puede llegar a una sola conclusión, que es, que más allá de un límite temporal, los hechos cometidos por Mauricio Cruz Cruz son punibles, que el dolo se encuentra abiertamente manifestado, se pudo apreciar por los sentidos, la prueba fue conocida, entendiendo los ejercicios realizados para reproducir varias veces el video, estimando que las diferentes opiniones vertidas deben transformarse en una verdad procesal, que es que el señor Mauricio Cruz Cruz pegó fuego y eso se consignó en el video. Que, relacionado con el informe pericial químico y el arduo trabajo que comprendió 8 meses de investigación ininterrumpida, en circunstancias adversas, ya que después estallido social vino la pandemia, el personal de Policía de Investigaciones trabajó y lidió con la identificación del acusado, gracias también a la ayuda de la doctora Aldana que a los oficiales del caso le dio cuenta de características determinantes para hacer coincidir características morfológicas y la cicatriz que



mantiene en sus brazos, información cruzada con Genchi, que cada vez que un interno ingresa a uno de sus recintos, debe hacer un registro corporal consignando marcas, tatuajes y antecedentes de su vida personal y estado de salud. Respecto del daño, Martínez refirió el valor arquitectónico, patrimonial y afectivo para los funcionarios y habitantes de la ciudad respecto de este edificio que alberga estas oficinas y locatarios a quienes ahí se les permitía mantener su fuente de trabajo, lo que no es un daño cuantificable, lo que no ha sido consignado en la acción civil, es más que lo demandado, porque también se tuvo que hacer un esfuerzo y despliegue en capacidad de reacción rápida para que el servicio público no dejara de prestar atención a los usuarios aun cuando se habían perdido documentos que consignan la historia de la propiedad raíz en Biobío y actual Ñuble, los que no pudieron ser restituidos ni recuperados. Señala que hay personas que han trabajado toda su vida en el lugar, por lo que se dispuso desde la mutualidad su contención emocional y directamente se debió invertir para restablecer el apego que funcionarios tenían respecto de su lugar de trabajo, hubo que hacer trabajo remoto y luego trasladarse a su nuevo lugar de trabajo a varias cuerdas, los trámites que se hacían en una sola dependencia ahora deben parcelarse en dos y a fines de diciembre principios de enero, Bienes Nacionales se tuvo que hacer cargo de instalar, en un inmueble que era de Cema Chile, las dependencias que hasta hoy albergan a la unidad regularización, haciendo presente que hay un área, dentro de la cual está el hecho en que tuvo participación Cruz que no ha sido hasta hoy, casi 5 años después vuelta a habilitar, por lo que están frente a pérdidas irreparables, que no son solamente materiales, sino que patrimoniales, arquitectónicas y afectivas. Indica que se ha intentado controvertir que es un solo incendio que se produce, claramente y lo que señala el perito químico, con vasta experiencia con formación académica y profesional dentro y afuera de la Policía de Investigaciones, lo que llama "áreas focales" satisface el tipo penal de distintos incendios, que haya habido un incendio en el frontis de la salida por Aníbal Pinto no significa que no pudo haber habido otro incendio y eso es lo que ha querido hacer pensar a la Defensa en su teoría diversa, que el fuego iniciado por el señor Cruz no tuvo la idoneidad para terminar con este desastre, insistiendo en que hay un fuego en esa oficina, que hay humo que no deja de salir y de repente todo se va a negro. Manifiesta que la investigación fue de larga data, no fue una detención en flagrancia, la investigación se formaliza en junio 2020, la Defensa la única prueba que presenta no es una diligencia que solicitó durante la investigación, no es que haya tenido un rol activo durante el proceso investigativo, podía haber sido una reconstitución de escena u otra instrucción particular, porque el Ministerio Público en su principio de objetividad debe dar lugar a las solicitudes de la Defensa en cuanto a diligencias, sin embargo, casi 5 años después, pretende introducir un peritaje de otra causa, de otro incendio con dificultades metodológicas, que don Isaías durante su trayectoria, en su oficio de perito, ha practicado 10 peritajes, habla de una cuestión aritmética, el Ministerio Público señala ángulos y Candia señaló que no tuvo a nadie al lado que le dijera que dicha oficina perteneciera a tal o cual dependencia, él recorre las dependencias y, por





su apreciación, determina sólo un origen de incendio, por lo que, sin entrar en comparaciones que puedan interpretarse como descalificaciones, hay dificultades que no satisfacen lo que pretende la Defensa instalar como duda del incendio de lo señalado por los acusadores. Refiere que más allá de la tragedia que significó este incendio, existen una serie de antecedentes que permiten sostener los términos de la acusación, sin que haya habido una defensa activa durante la investigación, estimando que el peritaje introducido por la Defensa, la remisión de los antecedentes al Tribunal Constitucional y a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, no son suficientes para instalar la duda que ha resaltado durante la secuela del juicio. El análisis de la prueba lo hizo su colega del Ministerio Público, por lo que no se extenderá, los antecedentes con los que se cuentan permiten acreditar la verdad procesal en que Mauricio Cruz Cruz incendia las oficinas de Bienes Nacionales dentro del edificio de la Gobernación Provincial de Concepción.

Respecto de la demanda civil, buscan obtener una responsabilidad patrimonial del acusado en los hechos materia de la acusación y prueba, destacando el testimonio de los testigos Salamanca y Martínez, que refieren una serie de gastos que se efectuaron para efectos de la reparación, en lo concreto de la habilitación de las dependencias de las oficinas de Bienes Nacionales y la unidad de regularización, según prueba documental por la suma de \$102.883.526 del presupuesto de Bienes Nacionales para el 2019, prueba documental propia, que da cuenta de la protección y habitabilidad del edificio siniestrado, y la habilitación de las nuevas oficinas indicadas por Martínez y Salamanca, además, desglosa los montos indicados en la prueba documental propia del Consejo de Defensa del Estado, indicando que entiende que de acuerdo a los hechos expuestos y el mérito de la prueba, la responsabilidad del señor Cruz Cruz, desde el punto vista patrimonial, se encuentra acreditada, porque pudo representarse el daño civil de la oficina, con las consecuencias latamente expuestas, conforme a la prueba, particularmente por los funcionarios de Bienes Nacionales que declararon. Que la respuesta al conflicto penal, al caos generado ese día, no puede sino traducirse en una decisión condenatoria y que se condene al acusado respecto a las acciones civiles a través de la legitimación que tienen como servicio para perseguir su reparación patrimonial.

Que la **Delegación Presidencial** señala que el 12.22.2019 en medio del estallido social, entre manifestaciones, barricadas y cortes de tránsito se produjo en el edificio de la Delegación Provincial, que albergaba otros servicios públicos como la Seremía de Bienes Nacionales, Extranjería y locales comerciales de la Galería Alessandri, 4 focos de incendios independientes entre sí, uno de ellos provocado deliberada y conscientemente por el imputado de autos, acción plasmada en las cámaras de seguridad de la oficina siniestrada, oficina perteneciente a la Seremi de Bienes Nacionales Este registro fue exhibido en numerosas oportunidades y se logra apreciar al acusado acopiando material combustible, hojas de papeles y material en el piso, y colocarlo dentro del cajón de un estante y, con un elemento portador de llama, provoca fuego, se retira y pierde el control del fuego, se ve en las cámaras hasta que



quedan oscurecidas con el humo, fijando la incandescencia en el mueble donde el imputado generó este fuego. Esto se establece en el peritaje planimétrico, láminas 19 y 20, se estableció y el perito químico estableció como área focal 3, se pudo apreciar las fotografías del perito fotográfico, que acompañó al perito químico y planimétrico en que se ven totalmente destruidas dichas oficinas, incluyendo la tabiquería divisoria, viendo solo un espacio amplio destruido, sin divisiones de oficinas, esto por acción calórica del fuego, por su parte, los testigos Martínez y Salamanca fueron contestes e identificaron además la zona focal N°3 como la correspondiente a su servicio y que dicho ingreso se realizaba a través de la Galería Alessandri y así también lo pudieron ver en el registro fotográfico expuesto en juicio, lo que es coincidente con la planilla de concurrencia de Bomberos de dicho día. Se debe considerar, como dijo el perito Leal, que estas horas eran estimativas, que ellos las ocupan para contrastar la restante información del registro de cámaras; que se debe tener en consideración las características particulares del día de los hechos, en que Bomberos no pudo trabajar e ingresar al edificio por manifestaciones en el exterior. Señala que se determinó la identidad del imputado, a quien vieron en las cámaras encendiendo el fuego a través de la investigación de funcionarios de la Policía de Investigaciones que recopilan los videos y registros fotográficos aportados por vecinos, como el registro audiovisual de Daniel Moron y la página web del Diario Concepción de 19.11.2019 donde se aprecia por segundos al imputado participando en desórdenes y barricadas, esto se determinó por sus vestimentas características, una polera nada típica confeccionada el 2012 por una academia de artes marciales mandándose a hacer 60 ejemplares, no la venden en el comercio habitual, por lo que es difícil encontrarla en otro lugar, una mochila fluorescente con letras azules, American Travel, sacada de circulación en el 2014 por la agencia de viajes, nada típica y que tampoco venden en el comercio habitual, zapatillas de determinadas características, un cinturón de género blanco que pudieron ver cuando el sujeto se agacha y prende fuego, y cicatriz en su hombro con forma se L invertida, como declararon los funcionarios policiales, a la consulta hecha a la doctora Carla Aldana; que una cicatriz es única en cada persona e irrepetible, además de tener en el mismo brazo un tatuaje, pudiendo situar al imputado en el sitio del suceso, en el lugar el 19.11, ya que él se retiró de su trabajo en Preserva a las 12 horas, lo que le da tiempo de trasladarse a las manifestaciones y situarse en el sitio del suceso, lo que es coincidente con la declaración del hijo del imputado a funcionarios policiales que señaló que habitualmente asistían. Con lo anterior, da por contestadas las interrogantes de la Defensa respecto del hecho punible y la participación, agregando que el incendio fue de tal magnitud que, como lo señaló el funcionario Salamanca, afectó el normal funcionamiento del servicio completo, que transcurridos 5 años aún no se recuperan las instalaciones, que los funcionarios de mayor antigüedad debieron recibir apoyo psicológico y que los documentos no han podido ser recuperados. Estima que concurre la agravante del artículo 12 N°10 del Código Penal, ya que a contar del 18.10.2019 comienza el estallido social, manifestaciones sociales legítimas que mutaron y escalaron en grado violencia, lo que resultó en gravísimos incidentes, entre



otros, también en el edificio de la Gobernación, hoy Delegación Presidencial, en que se incluyen daños, incendios, saqueos, cortes de tránsito, lo que determinó se decretara Estado de Excepción Constitucional de Emergencia conforme la Constitución Política de la República; este hecho se ve reafirmado por la declaración de los 3 funcionarios policiales que deponen en estrados, Sierra, Ramírez y Valdés, quienes a raíz de estos hechos fueron destinados al Centro de Control de Crisis que señalaron, fueron destinados a investigar al menos 25 incendios en nuestra ciudad, donde se albergaban instituciones públicas y privadas, lo que se desprendió de las imágenes y registros audiovisuales de evidencia material que vieron, encapuchados, desórdenes, fuego, barricadas, y el acusado participando de ellas. Que Fernando Salamanca señaló que el edificio no contaba con resguardo policial por los desórdenes en diferentes puntos de la ciudad. A la fecha de los hechos la provincia se encontraba bajo Estado de Excepción Constitucional, el acusado tenía pleno conocimiento, aprovechándose de esto para facilitar su impunidad, por lo que solicita la agravante indicada y pide se dicte veredicto condenatorio. Respecto del delito de Desórdenes Públicos, señala ya hizo referencia, al analizar el video del reportero del pueblo.

Que a su vez la **Defensa** expresó que la prueba incorporada, les permite concluir dos cuestionamientos: 1) Aquella parte de la acusación que lleva a tipificar que una acción desplegada por alguien es el delito de incendio, y 2) La participación de una persona determinada a quien Ministerio Público le atribuye la comisión de este hecho, esto es, a Cruz Cruz. Alega que no puede obviar, pues es relevante, y con marcada objetividad del Ministerio Público, que aquí hubo un error en la acusación según lo señala este interviniente, pero que, según él, igualmente se podría arribar a un estándar condenatorio. Y este error, fue advertido, pues desde el momento que se investiga y se hace acusación, se alegó la existencia de él, esto es, la falta de congruencia en los hechos de la acusación, dado que en el evento que se llegare a condenar, los hechos probados deberían ser los mismos acusados, y, en este caso, los momentos, horas y minutos, a que se circunscriben estos hechos son diversos: un primer momento, se alude a las 15:40 con movimientos en el edificio de la Gobernación; luego de aquello, se va a las 15:49 horas, al interior de las oficinas del primer piso de la repartición, en donde el acusado habría hecho maniobras para combustionar unos papeles, encender fuego y generar llamas. Hasta ese momento, si se llegase a determinar que la persona de ese video es el acusado, se podría decir que se cumple un primer elemento de los hechos de la acusación, pero acá lo relevante es si esa acción resultó ser idónea, apta para cumplir con la segunda promesa del Ministerio Público de la acusación, en donde dice que esa acción “finalmente” provocó un foco de incendio, el que se descontroló, generando un incendio declarado a las 15:56 horas que consumió todo el mobiliario del primer piso, pero a ese momento, no se habla de incendio, como primer llamado, que habría ocurrido en esta oficina, sino que al primer foco de extranjería. Y el Ministerio Público ha reconocido que aquí hay un error: no corresponde, esta hora, cuando se declara un incendio por la persona que se ve en el video. Para ello, de acuerdo con las dos imágenes del video 7, a las 16:49



horas que podría ser las 15:49, y la siguiente imagen a las 16:56, las condiciones de esta oficina por la que se accede a esa galería, demuestran que no hay un incendio en esas dependencias y no se habla de un mismo foco de incendio. Y lo delicado de esta circunstancia, es que el Consejo de Defensa del Estado y la Delegación Presidencial, hicieron suyos los elementos de la acusación, de manera que el error del Ministerio Público está también circunscrito a estos otros dos intervinientes. Por otro lado, ese error se traduce en otra circunstancia no menor, porque la defensa y su teoría del caso, se basa en estos elementos fácticos, estos es, generar un foco de incendio que provocó incendio en las otras dependencias, declarado a las 15:56 horas, lo que no fue así. Por lo que cuando termina todo a las 16:22, cuando las cámaras dejan de grabar, ahora se quiere indicar, que ese humo que se ve, en algún momento, probablemente, generó llamas y fuego que se descontroló y que quemó todas las dependencias de la Seremía, lo que no fue probado, pues cuando se dice que hubo humo y brasas que se encendían, se quiere hacer creer que ese humo pudo haber generado un foco de incendio. En esto se dio la pelea en su oportunidad, llegando hasta el Tribunal Constitucional, pues eran necesarios todos los elementos de prueba para esclarecer una verdad procesal, y cómo no tenerla con los elementos que había disponibles en esta investigación. Y en esto, el mismo equipo investigador de estos hechos era el que analizó la situación de 12/11, se supo que hubo otro juicio, en el que se persiguió responsabilidad penal de otra persona, por los mismo hechos, el mismo día, pero en otro lugar de la Seremía, otro foco, y lo relevante para vincularlo con la pericia de Candia, es que éste declaró en ese juicio, y en él, los acusadores lo calificaron como un perito experto y relevante, quien sirvió a la condena para ese acusado. Y la importancia de esa pericia, es que él determinó el origen del incendio. Que tanto él como el perito químico aludieron a zonas focales, explicando su perito la diferencia con el origen del incendio, el que claramente, no estaba en la oficina del hall de acceso de la de Bienes Nacionales, cuyo hall es Galería Alessandri. Que el Ministerio Público ha planteado, no de mala fe, que hay un acceso por esa galería, que podría haber también más de uno, que podría no haber estado claro. Esto la lleva a señalar que si habían dudas sobre cuál era la dependencia, cuál era el hall de acceso del planimétrico mostrado, ese interviniente trató de despejarla con las preguntas a los funcionarios de esa repartición: Salamanca y Martínez, a quienes se les exhibe la evidencia N°10 del Ministerio Público, que son las fotografías de la dependencia de la Seremía, y quienes consultados a qué se accede cuando se ingresa por Alessandri, dicen ambos que era al hall de acceso a esta dependencia. Y frente a la pregunta a Salamanca, señala que de esa galería había un acceso a la oficina de partes, y Martínez dijo que había una vía de ingreso a estas oficinas, de manera pública, lo que es coincidente con lo señalado por Candia cuando se le muestra la foto 6 de su prueba, que dice que es inmediatamente al ingreso a este hall de acceso, y que este perito calificó en su pericia, como oficina de hall de acceso. El Ministerio Público ha intentado señalar que esto no correspondería, que sería otra oficina, lo cierto es que se hizo esta comparación al perito, y es la misma vía de ingreso. Lo relevante de acá, es que podría haber una explicación. Y se



puede ver que a las 15:56 se ve esta oficina sin incendio, no hay fuego, sin que existan grabaciones posteriores a las 16:22 horas; entonces ¿qué pasó con esta oficina?: la lógica es que deberíamos verla totalmente destruida. Pero hay otro antecedente, el aportado por Candia quien toma esa foto N°6 entre las 18:00 y las 18:30 horas, lo que debe asociarse a la bitácora de la concurrencia de Carabineros, en donde se reporta un inicio de fuego a las 16:57, un término a las 17:12 y luego otro a las 17:25, y finalmente que termina a las 21:34 horas. Cuando el perito toma las imágenes, de luz de día aún, esa oficina estaba en esas condiciones, estimando que si se asocia a la persona de los videos encendiendo un papel, en cuclillas, ahí no hubo un foco de incendio pues es imposible, técnicamente, que si hubiera habido incendio en ese lugar, la oficina hubiera quedado en esas condiciones, las que son diferentes a las imágenes de las otras oficinas: destruidas por completo al igual que el mobiliario, pero en esa imagen, fuego no hubo, y Candia dijo que estuvo haciendo su pericia pasadas las 23:00 horas, sin que hubiera un reinicio de incendio o de fuego, por lo que esas oficinas, a esa hora, seguía en las mismas condiciones de la foto N°6 de su pericia. Surge entonces la duda más que razonable: ¿por qué PDI cuando llegó a las 21:00 horas, no fijan el estado de esa oficina?, ¿por qué no está esa foto?: la respuesta es especulativa, debiendo el Tribunal ponderar la prueba rendida, y no sobre lo que pudo o no haber hecho la PDI pues ello pudo obedecer a que no lo estimaron punto de interés, o que la fotografiaron y luego la estimaron no relevante. Todas estas respuestas, son especulaciones, en definitiva, dudas que no pueden llevar a un Tribunal a un veredicto condenatorio, por esa sola circunstancia.

En cuanto a la participación, estima la Defensa que hubo ciertas infracciones, pues cuando la Policía dice que hubo análisis de video y de cámaras, ellos tienen como primera pista las de seguridad de la oficina de Bienes Nacionales. De ese video, se sacan fotogramas que se analizan en Santiago para determinar las características de vestimenta y de morfología. Se sabe también de la existencia de una mochila fluorescente, sin descripción de letras que se pudieran ver. En cuanto a la polera, de las marchas de 7/11 y del video, no se pudo establecer que la incautada correspondiera a la que se ve en las imágenes, lo que pide se pondere pues cuando la Defensa pregunta si sale el logo, se sabe que no es algo que se visualizara con claridad, señalándose en el juicio por dos funcionarios, que el detective Uribe, en su análisis subjetivo, determinó que era de una escuela de artes marciales. Respecto de la cicatriz, no hubo pericia técnica, sino que sólo se solicitó la opinión a la doctora Aldana no sobre si ellas eran idénticas, sino que "similares". Asimismo, los pantalones usados por la persona que aparece en cuclillas, no fueron los incautados, sino que uno que correspondería al del día 7/11. Por otro lado, no se conocía rostro. Y solo en diciembre hubo un control de identidad, del que quedó evidencia en tres imágenes fotográficas: dos tomadas a cierta distancia, sin que se pudiera ver lo que decía esa mochila, y luego se le toma una fotografía de frente, pero sin que se hiciera una fijación de este accesorio para ver si era coincidente con el incautado, es decir, se sigue especulando que la mochila de 12/11, es la misma incautada en el domicilio del acusado. En cuanto



a la invitación a declarar a quien portaba la mochila, sin advertirle su calidad de testigo de los antecedentes que andaban buscando, según las repuestas que éste da, sin que se le advierta, expresamente, los derechos sobre que podía no inculparse él o un familiar, alega que no basta la mención de los artículos, pero ellos no estaban descritos. Además, alega, el acusado en las afueras de su domicilio, fue objeto de una diligencia de investigación: se le toman fotos, a unos metros de distancia, dirigidas a él, las que fueron usadas para hacer un cuadro comparativo y exhibidas a Aldana, quien, a raíz de ella, resolvió que era la misma persona del 12/11, lográndose, a propósito de esto, la orden de entrada y registro, diligencia de imágenes que debió haber contado con el consentimiento de Cruz. Distinto es la que se toma cuando ya estaba detenido, pues él da la autorización. Las de la vía pública no eran fotos causales, pues eran para ser usadas en esta diligencia del cuadro comparativo. Por estas circunstancias, discute que el Ministerio Público haya acreditado la participación del acusado en estos hechos, en cuanto a la determinación e individualización que se hace en relación a su persona. Estima que está claro y recalca que los hechos de la acusación no resultaron acreditados, esto es, que el día respectivo, a la hora allí indicada, el acusado haya provocado un foco de incendio en las dependencias del primer piso, el que luego se declarara a las 15:56 horas. Y en esto las imágenes valen más que mil palabras. Estima que es inconsistente lo rendido por el Ministerio Público con lo señalado por este interviniente, pues esas imágenes hablan por sí solas. Por estas circunstancias, la Defensa mantiene su petición de absolución, no correspondiendo tampoco el daño civil por los montos demandados por el Consejo de Defensa del Estado. En cuanto al delito de Desórdenes Públicos, el Ministerio Público ya indicó que no se rindió prueba que hubiera participado en una clase de delitos el 12/11, pues se dice que la persona del 7/11 o una imagen de un señor arrojando un objeto a la vía pública, podría ser constitutiva de ese delito, solicitando la absolución de ese delito. Por último, respecto de la agravante, señala que no concurren los presupuestos de ella, solicitando que sea desestimada.

**SÉPTIMO: Réplicas.** Que, dado derecho a réplicas, los intervinientes no hacen uso de él.

**OCTAVO: Declaración final del acusado.** Que preguntado al tenor del artículo 338 inciso final del Código Procesal Penal, el acusado guardó silencio.

**NOVENO: Hechos acreditados.** Que, de esta forma el Tribunal, apreciando la prueba antes referida con entera libertad y sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, ha llegado a la convicción que se encuentra acreditado más allá de toda duda razonable, el siguiente hecho:

*Que, el día 12 de noviembre de 2019, a propósito del estallido social que afectaba al país, alrededor de las 15:40 un grupo de personas encapuchadas, comenzó*





*a lanzar objetos en contra del Edificio de la Gobernación, ubicado en calle Aníbal Pinto N°442 de Concepción, frente a la Plaza de la Independencia de Concepción, para luego, un grupo dirigirse a las puertas de la Galería Alessandri, ubicada en el mismo lugar, forcejeando las puertas de la misma, las cuales se encontraban cerradas, y que dan acceso al Edificio de la Gobernación, oficinas de la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, Extranjería, Correos de Chile, otros departamentos de servicios públicos y de diversos locales comerciales, ubicados en el mismo edificio, es así, que tras vencer las medidas de protección, personas ingresaron tanto a la Galería, como a las oficinas de la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, entre ellos, el imputado MAURICIO ANTONIO CRUZ CRUZ quien a las 15:49 horas aproximadamente, en el interior de las oficinas del primer piso, de dicha repartición pública, comenzó a mover papeles y otros elementos para combustionar, realizando acopio, de parte de ellos, en un mueble de oficina de la misma Secretaría, para luego, encender fuego a estos elementos acopiados, logrando generar llamas en dichas dependencias de oficina del primer piso, sin que estas se desbordaran al ser sofocadas o extinguidas por la intervención de un tercero y, en consecuencia, sin que generaran el incendio declarado con posterioridad.*

**DÉCIMO: Ponderación de la Prueba.** Como punto de partida, y con el objeto de facilitar el análisis de la prueba, se dirá que no existe controversia en torno al día y hora de los hechos, como tampoco respecto a que un incendio afectó el edificio ubicado en Aníbal Pinto 442 de Concepción que albergaba a la fecha, entre otras reparticiones públicas, oficinas de la Seremía de Bienes Nacionales de Concepción, ni que existían movilizaciones en el marco de lo que se denominó “estallido social” en las afueras de éste y en sus alrededores, sin perjuicio de las alegaciones de la Defensa.

Las acusadoras además lograron aportar suficiente material probatorio que brindó el grado de comprobación necesario a la hipótesis de hecho contenida en los libelos acusatorios que se tuvo por acreditada, al estar dotada de prueba testimonial, pericial, fílmica, material y documental, de consistencia y corroboración necesaria.

**I.-** Que respecto de la **fecha, hora y lugar de los hechos** las declaraciones de los testigos del Ministerio Público, Carlos Martínez Catalán, Fernando Salamanca Fredes y funcionarios de la Bipe de Policía de Investigaciones de Concepción Leonardo Sierra Villalobos, Eduardo Ramírez Pérez y Guillermo Valdés Mendoza, dan cuenta que los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2019, en el edificio de la Gobernación Provincial ubicada en Aníbal Pinto 442, Concepción, lugar en que mantenía sus oficinas la Seremía de Bienes Nacionales, en horas de la tarde, refiriendo el testigo Martínez Catalán que a las 15:40 horas habían destrozos en los primeros niveles del edificio, señalando el testigo Sierra Villalobos que le tomó declaración al guardia del lugar, Freddy Martínez, quien le relató que a las 15:40 horas personas ingresaron al edificio de la Gobernación y que a las 16:00 horas se retiró del lugar porque por el humo no se podía respirar, en concordancia con lo observado a través de las cámaras de seguridad del interior de la Seremía de Bienes Nacionales respecto de las cuales los funcionarios



policiales dieron cuenta en estrados se encontraban con un desfase de una hora, cuestiones no controvertidas por los intervinientes.

**II.-** Que respecto del **contexto** que el día y lugar de los hechos afectaba a la ciudad, todos los testigos son contestes en afirmar que el 12 de noviembre de 2019, Concepción se encontraba afectada por el fenómeno social que se denominó “estallido social”, que se traducía en que diariamente se verificaban en la ciudad marchas o protestas que afectaban el normal funcionamiento de ésta pues se interrumpía el tránsito vehicular, la atención del comercio y de los servicios públicos veía limitada su jornada debido a estas marchas o protestas que se tornaban violentas, con graves desmanes, ataques a la propiedad pública y privada, saqueos a locales comerciales y otras conductas semejantes, imposibilitándose incluso la intervención de las fuerzas de orden y seguridad. En particular, el testigo Carlos Martínez Catalán señaló que el día de los hechos afuera del edificio de la Delegación Presidencial habían barricadas en calle Aníbal Pinto, en el espacio que separa el acceso principal hacia la Plaza de Armas, y que el mobiliario fue sacado a la calle para utilizarse como obstáculo al tránsito vehicular, precisando los funcionarios Leonardo Sierra, Eduardo Ramírez y Guillermo Valdés que en este caso la violencia de las manifestaciones incluso impidió que Bomberos pudieran trabajar en el sector en una de sus concurrencias al edificio, según tomaron conocimiento a través del Informe de Bomberos Ordinario 45/2019 correspondiente a Documental y Otros Medios de Prueba N°6 el Auto de Apertura, el que fue exhibido en audiencia y que consigna en la planilla que contiene la concurrencia a las emergencias el día 12.11.2019, que concurren carros a la intersección de Aníbal Pinto con O’Higgins en una segunda oportunidad en dicha fecha, entre las 16:57 y 17:12 horas, no pudiendo trabajar por barricadas, contexto de dicho día y lugar que también logra apreciarse en las imágenes obtenidas desde la web por funcionarios a cargo de la investigación, según declaró Leonardo Sierra en estrados, Documental y Otros Medios de Prueba N°2 del Auto de Apertura, correspondiente a videos de Daniel Morón, “El reportero del Pueblo” y Diario Concepción, lo que se corroboró con su exhibición durante la audiencia de juicio.

**III.-** Que respecto de la **dinámica de ocurrencia de los hechos**, se acreditan con los dichos de los testigos civiles, refiriendo **Fernando Salamanca**, encargado administrativo de la Unidad Administrativa de la Seremía de Bienes Nacionales que el día 12.11.2019 se retiró a las 14:00 horas de su lugar de trabajo en Aníbal Pinto 442 porque había una salida anticipada por eventuales disturbios en el contexto del estallido social, atendido el lugar emblemático en que estaba ubicado el edificio y porque ese día además había un paro de locomoción, enterándose que se había producido un incendio en el lugar mediante el llamado por teléfono del encargado de la Unidad de Catastro, **Carlos Martínez**, quien a su vez depuso que dicho día él se quedó hasta más tarde en las dependencias de su unidad, ya que por instrucción de su jefatura debía terminar un plano, bajando la escalera desde el cuarto piso como a las 15:40 horas en que ya habían destrozos en los primeros niveles, habiendo ingresado al edificio personas que hacían desmanes, enviando un mensaje a las 15:45 horas



comunicando que habían descerrajado la puerta metálica y retirándose a su casa. Declaran funcionarios de la Bipe de la Policía de Investigaciones que concurrieron al lugar el 12.11.2019, **Leonardo Sierra y Eduardo Ramírez** que señalan que llegaron al edificio de la Gobernación de Concepción donde se emplaza, entre otras, las oficinas de la Seremía de Bienes Nacionales, a las 21:40 horas aproximadamente, en compañía de perito fotográfico, planimétrico y químico del Lacrim, pudiendo apreciar que el edificio presentaba daños por incendio y aún llamas en su interior, realizando la inspección del lugar que duró hasta aproximadamente las 23:30 horas en condiciones adversas para trabajar, ya que habían rebrotes de lugares que parecían apagados y que se volvían a incendiar, relatando el funcionario **Guillermo Valdés** que con posterioridad se recibió de parte del abogado de Bienes Nacionales un pendrive con el registro de cámaras de las oficinas de Bienes Nacionales. Los tres funcionarios ya individualizados en estrados dan cuenta de la observación de dichos registros, que fueron exhibidos en la audiencia de juicio y que corresponden a 11 pistas de videos de Documental y Otros Medios de Prueba N°1 del Auto de Apertura, quienes informan de manera conteste en torno a la **pista 7 N°163223** a una persona con capucha blanca, lentes de sol sobrepuestos en la cabeza, una polera sin mangas y una mochila fluorescente que ingresa al sector que enfoca la cámara en la oficina de Bienes Nacionales, en el primer piso, próximo a la puerta que da a la Galería Alessandri, se agacha, se le ve manipulando papeles en el interior de un mueble, que Guillermo Valdés denomina "Arturito", y se aprecia a través del reflejo de uno de los muebles que prende fuego, ya que se observa la incandescencia de éste, desplazándose esta persona hacia el lado izquierdo, dejando dentro del cajón algo que continúa incandescente, retirándose desde el punto donde está agachada, pudiendo apreciarse algunas características físicas y morfológicas de esta, retirándose del lugar, observándose el haz luminiscente más potente y humo, viéndose llama en el minuto 16:50, pudiendo posteriormente, en la **pista 8 N°264253**, ver a una mujer interactuar con otro sujeto a quien le trata de obstaculizar el paso hacia la Galería Alessandri, ingresando en la imagen otro sujeto que incorpora más papeles al mueble, se ve una llama y sigue saliendo humo, agarrando la mujer un basurero y empujando con él hacia abajo los papeles, comprimiéndolos y pisándolos con su pie, removiéndolos, momentos en que no se ve más llama, pero se observa que sigue saliendo humo, en el minuto 16:52 esta mujer -que relatan estos testigos policiales fue individualizada como Rosa Miranda y declaró ante ellos-, saca algunos papeles del cajón y los deja sobre el mismo mueble, viéndose que sigue saliendo humo desde el cajón y sobre el mueble de cajonera, siguiendo con la observación de las restantes pistas de video en orden de secuencia hasta que el ambiente se hace oscuro, se ve humo en él, observándose una luminiscencia del lugar desde donde se ve salir humo, sin lograr observarse más detalles ya que está prácticamente oscura la pantalla, sin verse llamas. Dichos funcionarios también dan cuenta que tuvieron a la vista 2 láminas que corresponden al peritaje planimétrico hecho por la Bicrim que corresponde a Documental y Otros Medios de Prueba N°19 y 20 del Auto de Apertura, que fueron



exhibidas al Tribunal, que dan cuenta de las plantas del primer y segundo piso del edificio siniestrado, en los que aparecen 3 focos de incendio en el primer piso y un cuarto foco en el segundo piso, lo que relacionan con la Documental y Otros Medios de Prueba N°6 del Auto de Apertura, que corresponde a un informe de Bomberos del día 12.11.2019 en que el primer horario registra inicio de la concurrencia a las 15:56 horas y término a las 16:16 horas, agregando el funcionario Guillermo Valdés que el horario de comisión de este hecho fue alrededor de las 16:00 horas, refiriendo a su turno el testigo Eduardo Ramírez que respecto de la primera concurrencia de Bomberos, entre las horas señaladas en el informe, en esa oficina no había incendio, ya que a la persona se le descubre iniciando esto a las 15:49 horas –que corresponde a las 16:49 horas de la imagen desfasada de la cámara de seguridad–, ratificando Leonardo Sierra que, a la exhibición de los videos incorporados, hasta las 16:21 horas –que corresponde a las 17:21 horas del registro de cámaras desfasado– no logra observarse fuego en el registro fílmico, salvo la llama que fue vista previamente que, imagina, intentó apagar la mujer que apareció en imagen, ya que tras su intervención el funcionario manifiesta que a las 15:55 horas no se ven llamas, sin perjuicio de agregar que, según su investigación, allí se inicia un foco de incendio que se desborda y origina un incendio.

**IV.-** Que respecto al **incendio declarado a las 15:55 horas** según la imputación de los acusadores, de conformidad a lo observado en las cámaras de seguridad Documental y Otros Medios de Prueba N°1 del Auto de Apertura, en dicho horario, en las dependencias del primer piso de la Seremía donde se prende fuego a las 15:49 horas (16:49 del registro que se explicó tiene una hora de desfase), este Tribunal, habiendo reconocido el Ministerio Público en su clausura que esto se trató de un error horario, descarta que esto haya ocurrido en cuanto al horario indicado y a la extensión del mismo, pero sin que ello pueda configurar una afectación al derecho a la defensa, pues no existe sustancialidad ni sorpresa en la imputación que se realiza. Si bien en este caso, claramente hubo diferentes horarios de concurrencia de Bomberos al edificio, lo fundamental, y sobre lo cual versa la imputación, es que al acusado se le imputa haber ocasionado el día de los hechos un incendio en una parte determinada del edificio de la Gobernación del Biobío.

Cabe destacar además sobre este punto, que la doctrina de derecho comparado, así lo ha entendido, estableciendo como manifestaciones del derecho a la defensa "La imputación necesaria. En primer lugar, para que alguien pueda defenderse es imprescindible que exista algo de que defenderse: esto es, algo que se le atribuya haber hecho u omitido hacer, en el mundo fáctico, con significado en el mundo jurídico, exigencia que en materia procesal penal se conoce como imputación. El núcleo de esa imputación es, según ya se ha observado, una hipótesis fáctica – acción u omisión según se sostenga que lesiona una prohibición o un mandato del orden jurídico – atribuida al imputado, la cual, a juicio de quien la formula, conduce a consecuencias jurídico-penales, pues contiene todos los elementos, conforme a la ley penal, de un hecho punible. La imputación correctamente formulada es la llave que



abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o algunos de los elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico-penal a la que, se pretende, conduce o, de otra manera, agregar los elementos que, combinados con los que son afirmados, guían también a evitar la consecuencia o a reducirla. Pero, para que la posibilidad de ser oído sea un medio eficiente de ejercitar la defensa, ella no puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico, esto es, en un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del imputado, y mucho menos en una abstracción (cometió homicidio o usurpación), acudiendo al nombre de la infracción, sino que, por el contrario, debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular, de la vida de una persona. Ello significa describir un acontecimiento –que se supone real- con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos (temporal y espacialmente) y le proporcionen su materialidad concreta; el lenguaje se debe utilizar como descriptivo de un acontecimiento concreto ya ocurrido, ubicable en el tiempo y en el espacio, y no para mentar categorías conceptuales. De otro modo, quien es oído no podrá ensayar una defensa eficiente, pues no podrá negar ni afirmar elementos concretos, sino, a lo sumo, le será posible afirmar o negar calidades o calificativos (no soy homicida, no soy malo, soy bueno, etc.); tanto es así, que ni una confesión sería teóricamente posible, si por ella se entiende la afirmación de todos los elementos fácticos de un comportamiento punible, pues la afirmación incondicionada de una imputación que no repose sobre la descripción de un comportamiento concreto se asimilaría a un allanamiento y no a una confesión. La imputación, por lo demás, no debe comprometer al tribunal que juzga, esto es, no debe partir de él: para conservar su imparcialidad y evitar toda sospecha de parcialidad, todo compromiso con la hipótesis acusatoria que conforma el objeto del procedimiento. Esta es la máxima fundamental del principio acusatorio, expresada en los aforismos latinos “ne procedat iudex ex officio” y “nemo iudex sine actore”, aforismos, que en el procedimiento penal, sobre todo en la persecución de delitos de acción penal pública, sólo tienen un significado puramente formal, para posibilitar la defensa del imputado y la imparcialidad del tribunal, al contrario de lo que sucede de ordinario en el procedimiento civil, dado el dominio de la autonomía de la voluntad de las partes (principio dispositivo). (“Derecho Procesal Penal” Tomo I. fundamentos, autor Julio B. J. Maier. 3º reimpresión 2º edición, editores del Puerto, Buenos Aires.), pudiendo concluir, de acuerdo a lo anterior, que no se advierte que el horario de incendio señalado en la acusación, que el propio persecutor fiscal reconoce erróneo, prive al acusado del derecho a Defensa que le reconoce la legislación.

**V.-** Que respecto a este mismo punto, pero en concreto al **incendio declarado** al que hace referencia la imputación, cabe señalar que la prueba rendida en juicio sólo permitió asentar que el incendio que consumió parte de la oficina del primer piso de la Gobernación correspondiente a la Seremía de Bienes Nacionales, no fue el causado por el encartado, sino que un partícipe diverso, no pudiendo imputársele a Cruz Cruz la



autoría del mismo, sino que sólo la acción provocada en el específico sector y oficina a que se refieren las filmaciones de videos y la declaración del perito de la Defensa.

A este respecto es relevante agregar que si bien el perito Gonzalo López Leal manifiesta que en dicho edificio hubo 4 focos de incendio independientes entre sí, sin relación de fuego entre ellos, apoyándose para ello en las láminas confeccionadas por la perito planimétrico, correspondiente a Documental y Otros Medios de Prueba N°19 y 20 del Auto de Apertura, fotografías del día de los hechos tomadas después de las 21:40 horas del frontis del edificio de la Gobernación, de las áreas que denomina área focal N°1, 2, 3 y 4, correspondientes a Documental y Otros Medios de Prueba N°22 del Auto de Apertura, y que deben relacionarse con las fotografías exhibidas a los testigos Carlos Martínez y Fernando Salamanca, funcionarios de la Seremía de Bienes Nacionales, correspondiente a la Documental y Otros Medios de Prueba N°10 del Auto de Apertura, el registro de cámaras de lo que ocurría al interior de la oficina en que se observa al sujeto pegar fuego al interior de un cajón, Documental y Otros Medios de Prueba N°1 del Auto de Apertura, logran captar sólo hasta el momento en que el ambiente se torna denso y oscuro por el humo que existía en el lugar, sin advertirse en dicho registro llamas, por lo que mal podría sostenerse, como lo ha hecho el Ministerio Público apoyándose en dicha evidencia fílmica, que esa gran cantidad de humo que se ve sea consecuencia de una acción calórica que se estuviera generando en el mueble que captaba dicho registro, habiéndose rendido a su turno prueba de descargo pericial y fotográfica, deponiendo en estrados Isaías Candia Barrera, perito de incendios del Cuerpo de Bomberos de Concepción, que concurrió al lugar de los hechos el mismo día que estos acontecen, pasadas las 17:30 horas, con luz de día, coincidiendo con el perito de Lacrim en la distribución espacial de la planta del edificio al tenor de la Documental y Otros Medios de Prueba N°19 y 20 del Auto de Apertura, correspondiente a la planimetría confeccionada, como asimismo, en cuanto a la mayoría de las conclusiones técnicas, quien dio cuenta de diversos antecedentes vinculados con el oficio que desarrolla y la especialización que ha recibido en el mismo, los que se vinculan con el origen del incendio y el descarte respecto a la existencia de fuentes de energía como artefactos eléctricos y fuentes de calor o combustión, como cocinillas o cilindros que signifiquen gas, petróleo o sus derivados, corroborando lo señalado por el perito presentado por los acusadores en cuanto a que éste se debió a algún cuerpo portador de llamas, como un encendedor o fósforo, aplicado sobre material combustible, por lo que la causa del incendio es la acción de terceros, esto es, un incendio provocado, señalando que el incendio que afectó a dicho edificio, al ser de gran envergadura, contempló la concurrencia de fenómenos tales como la convección y la transferencia de calor, indicando al igual que el primer perito que, para que se produzca un incendio, debe haber oxígeno, un cuerpo portador de llama o calor y combustible, sin embargo determinó la existencia de solo 1 foco de incendio, explicando que en un incendio pueden haber varios focos o un solo foco se puede propagar, indicando que recorrió todas las dependencias del primer, segundo, tercer y cuarto piso, realizando fijaciones fotográficas, las que se exhiben en juicio y son por él





explicadas, correspondientes a Prueba Documental Propia de la Defensa N°1 del Auto de Apertura, consistente en 18 fotografías, en especial, la exhibición de la fotografía N°6 del set referido, que el perito explica corresponde a una oficina donde hay material no combustionado, esto es que no alcanzó el fuego, describiendo que se logra apreciar en la fotografía que el fuego viene de arriba hacia abajo y por eso la transferencia de calor es por masa de aire caliente y empezó a derretir el plástico de la impresora que se ve, el mobiliario y el entorno, explicando que la tomó al ingreso del hall por el interior de la Galería Alessandri, fotografía que al ser cotejada con el registro audiovisual de la Documental y Otros Medios de Prueba N°1 del Auto de apertura, incorporado por el Ministerio Público, cuenta con exactamente las mismas características de la oficina en que se ve prender fuego al acusado, y aquí no se hace una referencia al tipo y características del mobiliario solamente, que generalmente dentro de una repartición pública tiende a ser del mismo tipo, sino a los marcos de las puertas de vidrios que se ven al fondo, la cantidad de mobiliario y su distribución, el monitor del computador del lado izquierdo de la imagen que se encuentra con su pantalla boca abajo sobre el escritorio, el librero alto de mano derecha de la imagen con el mismo número de archivadores y en la misma posición, como el librero a mano derecha de este último— llamado por el funcionario policial Guillermo Valdés “Arturito”— donde el propio perito señala se ven hojas encima, lo que, adicionado al hecho que las cámaras no captaron la propagación del fuego en dichas dependencias y los dichos de Candia Barrera respecto de la exhibición del video ya señalado, pista 7 N°163223, en cuanto a que esta oficina está dentro de la planimetría en el sector general marcado como área focal N°3 a la que se accede por la Galería Alessandri, sector en que refiere él también fijó el origen del incendio, pero en otro lugar, todo lo que logra generar en este Tribunal una duda razonable respecto de que el fuego pegado o iniciado por el acusado a las 15:49 horas haya provocado el incendio que afectó a las dependencias de la Seremía de Bienes Nacionales dentro del edificio de la Gobernación.

A mayor abundamiento, si bien los testigos Salamanca y Martínez que trabajaban en dicha repartición reconocieron en las fotografías que les fueron exhibidas como siniestradas las oficinas de la Seremía, no dieron una relación circunstanciada de su distribución y extensión espacial, como tampoco hicieron referencia alguna al hall de acceso, ya que ha quedado demostrado que dicha repartición no sólo ocupaba una dependencia dentro del edificio de la Gobernación y, los dichos de Salamanca a la exhibición de la fotografía N°1 del Set de la Documental y Otros Medios N°18 del Auto de Apertura, respecto a que el acceso a dichas dependencias eran por el Local 13 de la Galería Alessandri, no permiten desvirtuar la conclusión a la que arribó el perito de Bomberos en la que, utilizando la fotografía N°2 del set fotográfico incorporado por la Defensa, refiere que frente del acceso que él explica corresponde a la Seremía desde la galería Alessandri, se aprecia el número de local 22, toda vez que si bien el Fiscal alega en su clausura que en relación a lo señalado por el testigo que trabajaba en el lugar el acceso era por el local 13 y por ende no se trataría del mismo lugar ya que habrían alrededor de 10 locales de



diferencia con respecto a la fotografía del acceso al que hace referencia el perito de la Defensa, ninguna probanza se rindió respecto a la distribución de la numeración de dicha galería ni tampoco existe corroboración alguna respecto que el acceso referido por el testigo Salamanca corresponda a la numeración por él señalada. Asimismo, el Fiscal en su clausura refiere que lo que existe al interior de la oficina fijada en la fotografía N°6, exhibida al perito de la Defensa, no es lo mismo que hay en la oficina donde levantan el video de la cámara de seguridad, basando esta alegación en que en la puerta que da hacia la Galería Alessandri, no se ven los obstáculos puestos allí por doña Rosa Miranda y tampoco se ve una planta que estaba sobre el librero a la derecha de la imagen del video de la cámara de seguridad, respecto de lo cual hay que señalar que ninguno de esos ángulos (ingreso por Galería Alessandri y parte superior del mueble donde estaba la planta) quedó registrado dentro de la imagen fotográfica, por lo que dicho fundamento no tiene el correlato en la imagen exhibida en estrados, en razón de lo cual no podemos saber si estaban en dicho lugar o no la planta y los obstáculos a que hace referencia.

**VI.-** Que respecto a la **identidad de la persona** que ejecuta la acción descrita, los funcionarios Leonardo Sierra, Eduardo Ramírez y Guillermo Valdés explican que a la época de los hechos estaban asignados a la Bipe, refiriendo que dicha unidad se dedica a investigaciones de alta complejidad y que, a los pocos días de empezar el estado de calamidad, la Prefectura creó una Oficina de Crisis que reunió a funcionarios de distintas brigadas, incluida la de ellos, los que vigilaban marchas, hacían análisis, recopilaban y compartían información, manteniendo funcionarios operativos que tomaban fotos de los disturbios, marchas y veían las cámaras de Cenco. En su brigada se recibieron investigaciones de incendios a entidades privadas y públicas, distribuyéndose en equipos de trabajo que colaboraban entre ellos, correspondiéndoles la concurrencia al edificio de la Delegación Presidencial el 12.11.2019. Los testigos Sierra y Ramírez señalan que trabajaron el sitio del suceso conjuntamente con perito químico, fotógrafo y planimétrico del Lacrim y que, con posterioridad recepcionaron las cámaras de seguridad que existían al interior de la Seremía de Bienes Nacionales, lo que es corroborado por el funcionario Guillermo Valdés Mendoza que participó conjuntamente con los antes nombrados para efectos de individualizar a la persona que se veía en dichos registros iniciando fuego, siendo contestes los investigadores en las diligencias realizadas paso a paso para dar con la identidad de ésta. Destacan que a la observación de las cámaras sólo contaban con características morfológicas de la persona, de vestimentas especialmente la polera blanca sin mangas, parte superior negra, que mantenía inscripción circular en el pecho, zapatillas oscuras con planta blanca que a la altura del talón tenían como una diferencia de color, cinturón color blanco y un pantalón tipo jeans gris oscuro, una mochila amarilla o verde fluorescente con letras azules, como asimismo una malformación, marca o cicatriz grande en uno de sus brazos. Dan cuenta que al proceder a revisar imágenes de otras marchas y manifestaciones, logran observar en imágenes del 07.11.2019, entregadas por vecinos, a un sujeto de similares características que vestía polera blanca sin mangas



con el logo circular, un pantalón de buzo negro con líneas blancas, viéndose en su brazo derecho una cicatriz, imágenes que corresponden a 3 fotografías de Documental y Otros Medios N° 3 del Auto de Apertura, agregando que también realizaban análisis constante de la web y redes sociales, encontrando en Facebook, un perfil del “reportero del pueblo” Daniel Morón, que participaba en marchas en el centro de Concepción, que dentro de sus publicaciones mantenía un video del 12.11.2019 en que se logra observar una gran cantidad de personas en la intersección de calle Aníbal Pinto con O’Higgins, esquina de Plaza Independencia, a metros del edificio de la Gobernación, en la que ellos vieron al sujeto de interés en relación con las prendas mencionadas, la polera y mochila, que quedó plasmado en fotograma de 2 imágenes Documental y Otros Medios N°3 de Otros Medios de Prueba, como asimismo, encontraron en el portal Diario Concepción de fecha 12.11.2019 un video en que se ven manifestaciones afuera del edificio de la Gobernación, logrando observar a este sujeto de interés, con la mochila y polera mencionadas, este último video que corresponde a Documental y Otros Medios de Prueba N°2 del Auto de Apertura, en el segundo 7 (Diario Concepción) que se exhibe, haciendo presente que ellos hasta ese momento de la investigación no tenían rostro, ya que en las imágenes de las cámaras de la Seremía el sujeto mantenía la cara cubierta, por lo que los orientaban la mochila y polera. De igual manera, procedieron a hacer un análisis de distintas fotografías operativas obtenidas desde la azotea de la Corte de Apelaciones de Concepción, logrando ubicar el mismo 7.11.2019 al sujeto de interés criminalístico (que portaba mochila y polera ya descritos y pantalón de buzo negro con rayas blancas) participando en manifestaciones cerca de la Plaza de Tribunales, Documental y Otros Medios de Prueba N°14 del Auto de Apertura.

Refieren que procedieron a la revisión detallada de los videos (registros de cámaras de la Seremía, del Reportero del Pueblo y Diario Concepción) y de las imágenes del 07.11.2019, manteniendo su atención en la polera y mochila, y que al hacer un análisis en internet y redes sociales, detectaron una camiseta muy similar a la del sujeto, que correspondía a una camiseta de Kickboxing, artes marciales mixtas, Club Real Evolución, que se abreviaba CRE en su parte delantera y que era de la ciudad de Concepción, evidencia correspondiente a Documental y Otros Medios de Prueba N°12 del Auto de Apertura, entrevistándose con un profesor de la academia, Pablo Reyes, a quien le mostraron las imágenes que mantenían, reconociendo que esa polera había sido utilizada por personas de su academia mandándose a hacer 60 para una competencia en Santiago el 2012, agregando que era muy característica la capucha negra que la prenda mantenía, sin lograr reconocer características morfológicas de la persona en cuestión, solicitándose información a la oficina del Ejército de Chile que controla las academias de artes marciales y este tipo de escuelas, pero no existían antecedentes de esta academia, diligencia que tiene su correlato en Documental y Otros Medios de Prueba N°8 del Auto de Apertura.

Respecto del otro objeto de interés que era la mochila amarillo o verde fluorescente con letras azules, tampoco tenían más antecedentes, pero conversando



con colegas alguien indicó que se parecía mucho a una mochila que entregaba American Travel en las giras de estudio, por lo que fueron a las oficinas entrevistándose con una ejecutiva de la agencia que informó que efectivamente usaban una mochila de esos colores y letras para las giras de estudios hasta el 2014, por lo que la cantidad de personas que la habían utilizado eran muchas.

Con esta información le solicitaron a la Oficina de Crisis que si en alguna marcha o manifestación observaban esta polera o mochila ojalá pudieran realizar un control de identidad, contactándose el 04 de diciembre de 2020 colegas de dicha oficina con el inspector Guillermo Valdés Mendoza para manifestar que había un sujeto en una marcha de Colo-Colo que mantenía una mochila con las características que andaban buscando, por lo que se les solicitó que realizaran un control de identidad al sujeto y tomaron fotografías, lo que fue corroborado con Documental y Otros Medios de Prueba N°15 del Auto de Apertura, pero las características físicas de la persona controlada no eran las del sujeto que buscaban, ya que era una persona de contextura más o menos delgada y la persona controlada era de contextura gruesa, correspondiendo a Mauricio Cruz Torres, de 20 años que vivía en calle Hamburgo, Hualpén, según el sistema biométrico.

Siguieron analizando información hasta que decidieron tratar de ubicar a la persona controlada con la mochila, concurriendo hasta el domicilio que tenían, pero la familia ya no vivía en ese sector, por lo que volvieron a consultar las bases de datos encontrando otra dirección en calle Nápoles 2636, Población Armando Alarcón del Campo, en Hualpén donde el 02.02.2020 encontraron a Mauricio Cruz Torres solicitándole voluntariamente que los acompañara al cuartel para entregar su declaración de testigo, manifestando que no tenía dinero para trasladarse, por lo que se ofrecieron para llevarlo e irlo a dejar, dándole a conocer sus derechos como testigo, lo que quedó estampado en su declaración, señalando que vivía con su padre y hermana, que había ido a estas marchas en el centro de Concepción, que en ocasiones ocultaba su rostro y que concurría con 2 mochilas, una naranja y la otra la de color amarillo que fue la que utilizaba en su control de identidad, pero como sus características no concordaban se le preguntó quién más utilizaba esa mochila, indicando que en oportunidades su padre, que también concurría a las manifestaciones. Al trasladarlo de vuelta a su domicilio apareció su padre caminando en vía pública con una polera sin mangas, pantalón de buzo negro con rayas, conversando con él para darle a conocer la diligencia realizada con su hijo, manifestando que trabajaba como recolector de aseo en la empresa Preserva, pudiendo apreciar una cicatriz en su hombro y brazo derecho, por lo que a raíz de las semejanzas morfológicas, de vestimentas y cicatriz, se tomaron fotografías operativas del sujeto en la vía pública, las que fueron exhibidas en estrados correspondientes a Documental y Otros Medios de Prueba N°16 del Auto de Apertura, individualizando al sujeto como Mauricio Cruz Cruz.

Teniendo la información de que Cruz Cruz trabajaba en la empresa Preserva en Hualpén como recolector de basura, concurrieron a las oficinas de dicha empresa



entrevistándose a doña Evelyn Bello, que confirmó que Mauricio Cruz Cruz trabajaba allí, por lo que solicitaron el libro de asistencia laboral para determinar si el 7 y 12 de noviembre de 2019 se había presentado a trabajar y su hora de retiro, estableciéndose el 7 de noviembre trabajó hasta 17:10 horas y el 12 de noviembre hasta las 12:10 horas, lo que les permitía fijarlo en el sitio del suceso ya que no se encontraba en su lugar de trabajo, información corroborada mediante Documental y Otros Medios de Prueba N°7 del Auto de Apertura que corresponde a copia del libro de asistencia de Sociedad Preserva del mes de noviembre de 2019, consistente en 2 hojas que están firmados en su cara posterior por Evelyn Bello Adales y tiene timbre de la empresa.

Con esta información se enviaron las imágenes que se habían logrado recopilar al Lacrim sección audiovisual en Santiago, obteniéndose imágenes más claras del 7 y 12 de noviembre de 2019 y 02 de enero de 2020, las que fueron incorporadas a juicio mediante Documental y Otros Medios de Prueba N°18 del Auto de Apertura. Asimismo, realizadas las pesquisas, Mauricio Cruz Cruz en el sistema del Registro Civil mantenía una condena penal, por lo que les solicitaron información a Genchi si mantenían fotografías o datos morfológicos de éste, recibiendo documentación en que se señalaba que mantenía una cicatriz en brazo y hombro derecho, además de tatuajes, de conformidad con Documental y Otros Medios de Prueba N°9 del Auto de Apertura, que corresponde a registro de estadísticas de Genchi que cuenta con ficha y fotografía de la persona consultada, Mauricio Antonio Cruz Cruz, Rut 11.984.982-9, en que se consigna una cicatriz en el brazo derecho por pelea y en el mismo brazo un tatuaje correspondiente a una cobra y un corazón, y en la fotografía se puede ver una estatura de 1.70 aproximadamente.

Con dichas imágenes solicitaron a la perito planimétrico del Lacrim Concepción que informara si era posible determinar si la persona que estaba en las imágenes era la misma, emitiéndose un informe en el cual ella determinó que las imágenes que incluía el informe correspondían a la misma persona, por características de vestimentas, morfológicas y cicatriz en el brazo derecho, imágenes que fueron exhibidas y que se contienen en Documental y Otros Medios de Prueba N°17 del Auto de Apertura. Además se buscó la opinión de un profesional de la salud, tomándose contacto con la doctora Carla Aldana Saavedra, que además de trabajar en la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones trabaja en el Servicio Médico Legal de Concepción y se le mostraron 3 imágenes en la cual ella pudo observar que en la primera (imagen cámara de seguridad de Bienes Nacionales) aparecía una persona que mantenía una cicatriz con forma de L invertida en su brazo derecho, en la segunda fotografía (del 07.11.2019 entregada por vecinos) la persona tiene una cicatriz, la que se asemeja bastante al interior y está en el en el mismo segmento corporal, es decir, brazo derecho y que en la tercera fotografía (tomada al exterior del domicilio de don Mauricio el 02.01.2020), llegando la doctora en su declaración a la conclusión que hay semejanza en las 3 imágenes, indicando que correspondería a la misma persona en 3 lugares diferentes.



Con dicha información y cúmulo de indicios se obtuvo una orden de detención y entrada y registro para encontrar la mochila y polera de artes marciales que se veían en las imágenes, llevándose a cabo la diligencia el 29.06.2020, realizándose la detención a las 14:10 y, al registro de la vivienda, se logró encontrar en el domicilio de Cruz Cruz la polera blanca con capucha negra con inscripción en el pecho y espalda en forma circular con las iniciales CRE relativas a la academia de artes marciales mixtas, la mochila color amarillo flúor con letras azules con la inscripción American Travel, unas zapatillas con planta blanca con cambio de tonalidad en el talón marca Puma, pantalón de buzo negro con líneas blancas Adidas, incautándose además 2 teléfonos celulares y un anillo que esta persona mantenía en su dedo, esto último ya que en una foto operativa se observaba un anillo en un dedo, incautación de evidencia material que tiene corroboración en Documental y Otros Medios de Prueba N°5 y 6 del Auto de Apertura, explicando los funcionarios que la *polera* y la *mochila* eran la línea investigativa principal ya que era lo que podían rastrear de las vestimentas del sujeto que estaba iniciando un fuego en un cajón de las dependencias de Bienes Nacionales, relatando también la razón por la cual se procedió a la incautación de las otras especies, el *buzo negro* marca Adidas con líneas al costado de color blanco porque en las fotos operativas del 07.11.2019 se observaba a la persona utilizando una prenda de similares características junto a una polera similar a la descrita, el *cinturón color blanco* con hebilla negra e inscripción Mossimo porque, como se dijo, la persona que estaba en la dependencia de la Seremi de Bienes Nacionales utilizaba cinturón de color blanco, un *par de zapatillas Puma* tonalidades oscuras como negro con azul planta al costado de color blanco, que corresponde a las utilizadas por el sujeto de Bienes Nacionales y por último, un *anillo color metálico* ya que a la persona de interés se le observaba en una fotografía del 07.11.2019 con uno de similares características en uno de sus dedos de la mano izquierda, especies todas que fueron levantadas en el interior del domicilio de Nápoles 2633 comuna de Hualpén; sin que se haya determinado por los dichos de éstos el interés criminalístico de los 2 celulares incautados; diligencias y cumplimiento de las órdenes de detención y entrada y registro que obtuvieron además corroboración a través de su fijación fotográfica de conformidad a Documental y otros Medios de Prueba N°25 del Auto de Apertura, cuyos resultados permitieron concluir policialmente que Mauricio Cruz Cruz era la persona que fue captada con el rostro cubierto en la imágenes de seguridad de la cámara al interior de la Seremía de Bienes Nacionales.

## **DÉCIMOPRIMERO. Delitos Atribuidos:**

### **I.-Desórdenes Públicos**

Que respecto del delito de Desórdenes Públicos, se encuentra previsto y sancionado en el artículo 269 del Código Penal que establece "Fuera de los casos sancionados en el Párrafo anterior y en el artículo 268 septies, los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a una persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena.....".





Dos de los persecutores presentaron acusación por este delito, habiendo manifestado expresamente el Ministerio Público en su alegato de clausura que no rindió la prueba que estima permitía acreditar que el acusado haya cometido el mismo, que estaba constituida por la Documental y Otros Medios de Prueba N°1 disco 2, la que renunció, renuncia a la que se adhirieron ambas querellantes.

Que respecto de dicho ilícito, este Tribunal si bien estima que se probó con las declaraciones de los policías individualizados en el motivo anterior y con la abundante evidencia audiovisual y fotográfica que en las afueras del edificio de la Gobernación, actual Delegación Presidencial, antes, durante y con posterioridad al incendio que se produjo, en la vía pública, había gran cantidad de personas participando en manifestaciones generadas en el país a partir del 18 de octubre de 2019, en el marco del llamado estallido social, las que gritaban, saqueaban, lanzaban piedras y causaban daños, impidiendo el tránsito y el normal desarrollo de la actividad en el centro cívico de la ciudad, como se ve en los videos exhibidos en el juicio Documental y Otros Medios de Prueba N°2 del Auto de Apertura, lo que configura el tipo penal invocado, en forma independiente al delito de Incendio también imputado, ninguna prueba existe de que el acusado haya realizado alguna conducta adicional al hecho de estar presente en el lugar, según se aprecia en el video del Diario Concepción en el segundo 07 Documental y Otros Medios de Prueba N°2 del Auto de Apertura, no se le ve armando o prendiendo o participando en alguna barricada, ni tampoco obstaculizando el tránsito vehicular o peatonal, sino que dichos hechos se estaban produciendo de modo generalizado en la ciudad y no pueden, como ya se dijo, con la prueba rendida en juicio, serles imputables al acusado.

Por lo anterior, Mauricio Cruz Cruz deberá ser necesariamente absuelto de los cargos formulados por dicho ilícito.

## **II.- Incendio**

Que respecto del delito de Incendio, este se encuentra previsto y sancionado en el Libro II Título IX Párrafo 9 del Código Penal, denominado "*Del incendio y otros estragos*". Cabe hacer presente que los persecutores al imputar el referido delito en sus acusaciones, estimaron cada uno que se configuraban diferentes figuras de Incendio, la del artículo 475, 476 N°1 y 476 N°2 del código antes referido.

El profesor Gustavo Labatut Glenda, en su obra "Derecho Penal", tomo II, séptima edición, Editorial Jurídica de Chile, página 239, señala que "*Atendido a su naturaleza jurídica, los autores y las legislaciones modernas sitúan este delito entre los que entrañan peligro colectivo, porque es justamente el peligro que representa para la seguridad colectiva su característica más destacada, a causa de la posibilidad objetiva de que sufran una lesión jurídica un número indeterminado de personas y bienes.*"

Siguiendo al autor Guillermo Oliver Calderón, en "Delitos contra la Propiedad", primera edición, Legal Publishing Chile, página 514, "*El delito de incendio no consiste en la sola destrucción de cosas mediante el fuego. Como dijimos recién, para que la combustión de objetos sea llamada incendio se necesita que adquiera una característica particular: el peligro. Ha dicho la doctrina que se puede hablar de un*



*incendio cuando las llamas escapan al control de quien las ha iniciado, momento en que adquieren una capacidad destructiva que deriva, tanto de la peligrosidad del medio, como de su autonomía. No es necesario, en todo caso que el fuego sea ingobernable, pues seguirá siendo incendio si es controlado con posterioridad por la intervención de terceros. De modo que podemos decir que incendiar es crear una combustión incontrolada.”*

Respecto del objeto material de este ilícito, la conducta puede ejecutarse sobre bienes muebles e inmuebles.

En cuanto al Iter Críminis, el mismo Oliver Calderón en su obra ya citada señala, página 516, que: *“Según nuestra opinión, no hay obstáculo alguno para apreciar la tentativa o el delito frustrado en estos delitos, pues si bien existe un peligro para ciertos bienes jurídicos como la seguridad colectiva de las personas o de las cosas, éste se sanciona en la mayoría de los casos junto a la lesión de la propiedad, respecto de la cual puede predicarse el peligro. El delito de incendio no se consuma con la destrucción completa de los bienes por la acción del fuego, sino por la aparición de éste en forma incontrolada, por lo que habrá tentativa en toda conducta que implique un riesgo para la propiedad ajena, que provenga de un fuego no controlado. Será tentativa entonces la conducta de quien rocía gasolina en un edificio, pero no alcanza a prenderle fuego, y habrá delito frustrado si, encendiendo las llamas, éstas son apagadas cuando aún podían ser controladas por el sujeto pasivo”.* En el mismo sentido el profesor Labatut Glenda, en su obra citada, página 240, refiere respecto de este delito que: *“La tentativa se refiere al momento anterior al hecho de poner o pegar fuego a la cosa. Comienza con la ejecución de actos directamente encaminados a la perpetración del delito y termina cuando el sujeto se dispone a pegar fuego al objeto que desea incendiar.....; el delito frustrado, por su parte, existe cuando el fuego prende en el objeto, pero se apaga por causas ajenas a la voluntad del agente.”*

Dicho lo anterior, cabe analizar la conducta desplegada, que se logró acreditar en el caso sublite, a través de la prueba rendida en juicio, que como ya se señaló en el considerando décimo, respecto de la dinámica de ocurrencia de los hechos, consistió en que en la oficina de Bienes Nacionales, en el primer piso, en el sector próximo a la puerta que da a la Galería Alessandri, una persona se agacha, manipula papeles en el interior de un mueble, prende o pega fuego dejándolo dentro del cajón del mueble antes referido, retirándose del lugar, viéndose arder llamas en el interior de dicho cajón.

Dicha conducta constituye el delito de incendio, previsto y sancionado en el artículo 476 N° 2 del Código Penal pues, citando al profesor Mario Garrido Montt, en “Derecho Penal, Parte Especial”, Tomo IV, Editorial Jurídica de Chile, página 410, *“lo prohibido en este delito es la acción de prender fuego en una cosa ajena para destruirla o deteriorarla. La conducta consiste en provocar la combustión de algo; la transcendencia o magnitud de ese fuego no es significativa, suficiente es que el objeto principie a arder.”*



Por otro lado, si bien no existe consenso en la doctrina en cuanto a la exigencia de que se trate de un fuego incontrolable, lo cierto es que, de acuerdo a las imágenes incorporadas en las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondiente a un cd de la Documental y Otros Medios de Prueba N°1 del Auto de Apertura, el fuego que se prendió por el agente quedó fuera de la posibilidad de control de éste, quien se retiró del lugar, como fue posible apreciar en la pista 7 N°163223 minuto 16:50 que correspondería a las 15:50 horas.

Que este prender fuego se ejecutó en edificio dentro de un poblado, no cabe dudas, toda vez que a través de la prueba rendida, ya analizada, se pudo determinar que la dependencia donde se desplegó la acción fue al interior de una oficina de la Seremía de Bienes Nacionales ubicada en el primer piso del edificio de la Gobernación Provincial ubicado en Aníbal Pinto de Concepción, adyacente a la Galería Alessandri, que se encuentra emplazado en el centro de nuestra ciudad, frente a la Plaza de la Independencia, de manera que, sin lugar a dudas, está dentro de poblado.

Asimismo, si bien de las mismas imágenes se puede colegir que al interior del edificio habían personas, de lo afirmado por los testigos Carlos Martínez y Fernando Salamanca, en cuanto a que ese día las oficinas de la Seremi de Bienes Nacionales cerraron cerca de las 14:00 horas, quedándose éste último hasta las 15:40 horas ejecutando un trabajo encargado por su jefatura, se puede concluir que no era previsible la presencia de personas en el interior del edificio, debiendo además agregarse que esta circunstancia, de desocupar las oficinas, se repetía en muchas reparticiones públicas, en especial las ubicadas en el centro de la ciudad, considerando la violencia que se desataba en las manifestaciones, como una forma de proteger la integridad física y psíquica de los funcionarios que desempeñaban ahí sus funciones, lo que también ocurría en el comercio, ya que los locales comerciales también cerraban sus puertas. Debe adicionarse a lo anterior, sin perjuicio que se trata de un hecho público y notorio para quienes vivían en esta ciudad en dicha época, que todos los testigos relataron con detalle en estrados que el contexto social que vivió la ciudad durante el denominado “estallido social”, insertándose el día de los hechos en esta época de nuestra historia, en que se registraban marchas, barricadas, atentados, incendios, cortes de tránsito vehicular y peatonal, saqueos y daños, todos en el casco histórico, relevando como puntos neurálgicos desde la Plaza Independencia a la Plaza de Tribunales en el centro de Concepción, provocaron la decisión de las autoridades de culminar la prestación de los servicios, en las oficinas públicas, antes del horario normal.

Si bien el Consejo de Defensa del Estado, según el considerando tercero del Auto de Apertura, subsume los hechos en la descripción típica contenida en el actual artículo 475 del Código Penal, dicha calificación jurídica será descartada toda vez que, como ya se dijo, de la prueba rendida se pudo establecer que no era previsible la presencia de personas en el interior del edificio, y que si bien se pudo determinar la existencia de algunas personas al momento en que fue pegado el fuego por el agente, dicha circunstancia, basados en la historia y desarrollo de las figuras agravadas que



dicen relación con la muerte, mutilaciones o lesiones de personas afectadas por el siniestro, como –estima este Tribunal- su presencia no era previsible, interpretación que encuentra sustento en el análisis que hace ver el profesor Labatut Glenda en su obra ya citada página 241 señalando: “*En las actas de la Comisión Redactora se dejó constancia de que la disposición no comprende la muerte o heridas de los individuos que voluntariamente se introducen al lugar del incendio para extinguirlo buscando el peligro de que son víctimas, sino sólo a los que en los momentos del incendio se hallen cerca de él por accidente y sufran sus consecuencias sin voluntad alguna de exponerse a ellas (Sesión 103)*”, la que también ha sido recogida en el artículo “El Delito de Incendio como delito común de peligro abstracto en contra de Bienes Jurídicos Individuales” en Revista de Ciencias Penales, sexta época, Vol. XLVIII, Número 1 (2022) página 207 a 224 de Alejandro Awad Chertit, Universidad de Chile, que comenta recurso de nulidad acogido por la ICA de San Miguel en causa Rol N°1128-2021 de 8 de junio de 2021 que incide en causa RUC N°1901140739-3, RIT N°18-2021, del 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, referido a la aplicación del tipo penal del artículo 475 N°1 vigente con anterioridad a la última modificación legal, toda vez que con la probanza rendida se logró acreditar que el edificio donde se producen los hechos, que albergaba reparticiones públicas, estaba cerrado, con sus cortinas metálicas abajo.

Asimismo será descartada la calificación propuesta por la Delegación Presidencial, que subsumía los hechos en el tipo penal consignado en el actual artículo 476 N°1 de nuestro código punitivo, toda vez que no se logró acreditar que el edificio de la Gobernación (en aquella época) que albergaba la oficina de la Seremía de Bienes Nacionales donde se ejecutó la acción, correspondiera a un edificio o lugar destinado a servir de morada, no habiéndose rendido prueba en este sentido.

A su turno el Fiscal señaló en su apertura, que en su oportunidad se formalizó por la figura que se encontraba vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, pero que el 24 de diciembre de 2021 se dictó la Ley N°21.402 que, entre otras modificaciones, eliminó los numerales de dicho artículo, configurándose así en una norma penal más favorable para el encartado, de modo que, conforme lo previsto en el artículo 18 del Código Penal y las normas transitorias de la misma ley, acusó por la figura del artículo 476 N°2 del Código Penal, toda vez que es posible su aplicación retroactiva. En efecto, los numerales del artículo 475, que regían a la época de los hechos, sancionaba con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo a quien ejecuta el delito de incendio en N°1 “en edificios.....o lugar habitados o en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia” N°2 “en buques mercantes cargados con objetos explosivos o inflamable ..... archivos, oficinas o monumentos públicos u otros lugares análogos a los enumerados”. La norma así redactada, contemplaba una alta penalidad en atención al lugar en que se producía el incendio, sin considerar la real o potencial habitabilidad del mismo. A su turno, el artículo 476 preveía una penalidad menor (presidio mayor en cualquiera de sus grados) al “que dentro de poblado incendiare



cualquier edificio o lugar, aun cuando no estuviere destinado ordinariamente a la habitación” (numeral segundo de dicha norma). Así, este Tribunal comparte el argumento vertido por el ente persecutor fiscal en cuanto a que la Ley N°21.402 efectúa una nueva ordenación de este delito, que es más favorable en la especie al acusado, toda vez que gradúa su penalidad en consideración a la existencia real o previsible de personas en el lugar, de modo que en la actualidad el artículo 475 tipifica el delito de incendio en lugar -en sentido amplio- donde hubiere una o más personas y su presencia se pudiese prever, asignándole una penalidad más alta y reservando el artículo 476 una sanción morigerada para situaciones en que no hubiere personas o su presencia no se pudiese prever, razones por la que se acogió su pretensión respecto de la figura típica invocada, resultando más favorable al acusado la normativa vigente antes señalada, siendo legalmente procedente aplicar retroactivamente la modificación incorporada por la Ley N°21.402.

**DECIMOSEGUNDO: Alegaciones de Defensa.** Que en cuanto a las alegaciones de la defensa:

**I.- Desórdenes Públicos:** señala no existirían antecedentes probatorios para tener por configurada la participación de su representado en hechos que configuren dicho delito, lo que fue ratificado por el Ministerio Público en su alegato de clausura, refiriendo que no procedió a la exhibición del video en que esto se lograba acreditar, alegación la que fue acogida según quedó establecido en el considerando decimoprimer en su punto I.

**II.- Incendio:**

**1.- Error en la propuesta fáctica de la acusación,** señala que al contener ésta un horario en que se declara el incendio que no corresponde, importaría una *vulneración al derecho de defensa*, toda vez que precisamente respecto de los antecedentes fácticos se elabora la teoría del caso, alegación que fue analizada y en definitiva rechazada en la forma como se indicó en el motivo décimo punto IV; y en cuanto a que el evento de condena habría *falta de congruencia* si se diere por acreditada esa parte de la propuesta fáctica –lo que no acaeció-, deberá estarse a lo razonado en el motivo décimo punto V y lo que se dirá en el motivo decimotercero.

**2.- Respecto a que la conducta realizada no sería idónea para configurar el delito de Incendio,** dicha alegación deberá ser necesariamente rechazada, atendido lo también señalado en el motivo décimo punto V y decimotercero, sin perjuicio del grado de desarrollo de frustrado, que fue el que se tuvo por configurado, como se adelantó en el veredicto.

**3.- Respecto a la Participación:**

a) Que existiría *infracción de garantías*, en virtud que:

a.1) Sólo se habrían consignado en la declaración del hijo del acusado los artículos del Código que consagran los derechos de los testigos, sin embargo, habiendo declarado en estrados los funcionarios a cargo de la investigación y toma de declaración referida,



señalan le dieron a conocer en forma íntegra los derechos al testigo Mauricio Cruz Torres, sin que se haya rendido prueba en contrario sobre el punto y,

a.2) Las fotografías tomadas en la vía pública al acusado afuera de su domicilio en forma directa a él, no contaban con autorización para ser captadas, sin embargo, no se advierte razón alguna para que sea necesario una autorización en dicho sentido, atendido precisamente el lugar en que la imagen es captada, razones por las que necesariamente estas alegaciones serán rechazadas.

b) Que no estaría acreditada con la probanza rendida, cuestión que fue analizada y que se rechaza en virtud de lo que se dirá en el considerando decimocuarto.

**4.-** Respecto que no se darían los presupuestos para acoger la agravante invocada, sin referir las razones, también será rechazada, toda vez que el Tribunal estima se dan cada uno de los presupuestos fácticos para su configuración, como se razonará en el motivo decimosexto punto 2.

**DECIMOTERCERO: Calificación Jurídica y Grado de Desarrollo.** Que, los hechos establecidos en el motivo noveno con la prueba analizada, configuran el delito de Incendio, previsto y sancionado en los artículos 476 N°2 del Código Penal, como se analizó en el considerando decimoprimer, desde que el imputado, en un lugar poblado, el centro de la ciudad de Concepción, prendió fuego, en un edificio que no estaba destinado a la habitación, ilícito que dada las circunstancias del caso y el tipo de delito, se encuentra en grado de frustrado, puesto que el sujeto activo puso de su parte todo lo necesario para que el delito de incendio que objetiva y subjetivamente quería causar al interior de las dependencias destinadas a la Seremía de Bienes Nacionales que era albergada, como edificio, por la entonces Gobernación Regional, se consumara, lo que no se verificó por causas independientes a su voluntad, encontrándose en dicho estado de desarrollo imperfecto.

En efecto, conforme las probanzas rendidas y analizadas, no existe duda razonable ni articulada en orden a que el sujeto llegó hasta las oficinas de la Seremía de Bienes Nacionales en el primer piso, donde se encontraba la cámara de seguridad, realizó labor de acopio de papeles, material altamente combustible, al interior de un cajón de un mueble de madera, también combustible, prendiendo fuego e incorporándolo al interior de dicho cajón, produciéndose en su interior llamas, no lográndose su propagación a raíz de la intervención de doña Rosa Miranda, según ya se explicó a propósito de la dinámica de ocurrencia de los hechos en el considerando décimo de este fallo, lo que quedó registrado en el video de la cámara de seguridad, estimando que no se consumó el ilícito atendido que no se logró acreditar que el fuego que el sujeto pegó en los papeles dentro del mueble de la oficina de Bienes Nacionales observada en las cámaras de seguridad y examinadas, presencialmente en estrados por el perito de la Defensa, haya producido a su vez el incendio y destrucción que afectó a parte de la Seremía de Bienes Nacionales, como también se razonó en el considerando décimo V y decimoprimer 2.





Respecto de los estadios de ejecución imperfecto en este delito, ya se hizo referencia en el considerando decimoprimer 2 y, sobre el punto, en el mismo sentido encontramos el voto de mayoría de la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de 10 de marzo de 2023 conociendo de un recurso de nulidad en causa Rol N°58.240-2021, en su considerando Decimoséptimo estableció: *"Que, en relación a la última causal subsidiaria de este recurso, en que se argumentó la existencia de una errónea aplicación del derecho, fundada en que el delito sólo alcanzó el grado de tentado, estos sentenciadores considerando que el autor material puso todo de su parte para lograr la consumación del ilícito al encender la mecha del artefacto incendiario (bomba molotov) y luego lanzarlo al interior del edificio de la Iglesia Evangélica Luterana de Osorno, no generándose la combustión de la construcción por una causa independiente de su voluntad al no producirse la ignición del líquido acelerante luego del impacto, estiman que la sentencia no ha incurrido en una errónea aplicación del derecho al determinar el grado de ejecución que alcanzó el delito, pues los hechos que se dan por establecidos en el considerando duodécimo satisfacen plenamente las exigencias que el artículo 7 del Código Penal contempla para el estado de frustración del ilícito..."*, razones que llevan necesariamente a concluir que dentro de los estadios imperfectos de ejecución del delito, estamos en presencia del grado de desarrollo de frustrado y no del tentado, el que sólo puede establecerse en el evento de no haberse alcanzado a pegar o producir fuego, lo que difiere de las conductas desplegadas por el encartado y que han sido demostradas con la prueba de cargo.

**DECIMOCUARTO: Participación.** Que, en la conducta ha correspondido al acusado participación y responsabilidad en calidad de autor, según lo establece el Artículo 15 N°1 del Código Penal, por haber intervenido en su ejecución de una manera inmediata y directa, lo que fue demostrado cómo se indicó en el último punto del considerando décimo, toda vez que como se ha razonado los medios de prueba que se han rendido en el juicio, ponderados legalmente, han permitido llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable, de que la conducta desplegada por el acusado, en el contexto antes descrito y desde un aspecto objetivo, fue acopiar papeles dentro del cajón de un mueble de escritorio coloquialmente conocido como "arturito" conforme la descripción efectuada por el testigo Guillermo Valdés, pegar o prender fuego a un papel y dejarlo al interior del cajón donde mantenía el resto de papeles acopiado y retirarse del lugar. Esta acción fue incluso grabada por la cámara de seguridad de la oficina de la Seremía de Bienes Nacionales donde ocurrió (pista 7 N°163223 minuto 16:49), pudiendo percibirse cómo realizada dicha acción, que hubo fuego, llamas y humo en el lugar. Ahora bien, como elemento subjetivo de esta conducta, dicha acción estuvo directamente orientada a causar un incendio en un recinto ubicado dentro de un poblado, toda vez que el acusado acopió elementos para provocarlos, pegó o prendió fuego a uno de ellos, lo incorporó a un cajón de material combustible donde había realizado el acopio, en la oficina de la Seremía, viéndose frustrada su acción por la intervención de quien fue singularizada como Rosa Miranda por el personal



investigador que depuso en juicio, momentos en que Cruz Cruz se retira del lugar, declarando dicha testigo ante ellos durante la etapa investigativa que intentó apagar el fuego, sin saber si lo había logrado, lo que además se observa en la grabación de las cámaras de seguridad incorporada (pista 8 N°164253 minuto 16:51 en adelante), evitándose así la consecución del resultado típico de destrucción del edificio, a raíz de su actuar, sin perjuicio del o de los incendios que fueron provocados en el mismo inmueble y que lo afectó con las consecuencias observadas en las fotografías incorporadas (como el que afectó a Extranjería), respecto de lo cual no existe probanza alguna que permita atribuirle, más allá de toda duda razonable, intervención penalmente punible al acusado .

Para arribar el Tribunal a la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el acusado Mauricio Cruz Cruz fue quien tuvo esta participación, atendido que al registro de las cámaras de seguridad del lugar sólo se logra observar una persona con su rostro cubierto, se tuvo en especial consideración los indicios que surgen de los antecedentes referidos en el motivo décimo, en el punto VI, los que fueron detalladamente analizados.

Que nuestro Máximo Tribunal ha sostenido *“que las pruebas indirectas, indicios o presunciones revisten sin duda aptitud probatoria y su utilización en el proceso será siempre necesaria. Es la combinación armónica de los indicios la que conduce a la certidumbre, el concurso unánime de los indicios lo que autoriza el convencimiento del tribunal. Se establece la autoría con el mérito de indicios que se fundan en hechos reales y probados, son múltiples, tiene carácter grave, son precisos, directos y concuerdan los unos con los otros, de manera que su combinación armónica lleva al convencimiento que se exige para una sentencia condenatoria”* (sentencia de reemplazo de 1 de julio de 2008, dictada por la Excma. Corte Suprema en causa rol 6912-2007).

Si bien la sentencia antes citada fue dictada a propósito de hechos juzgados conforme al antiguo proceso penal, los razonamientos contenidos en ella son igualmente aplicables al caso de marras y son recogidos ampliamente por la doctrina. En efecto, son innumerables los autores que aceptan que el tribunal pueda dar por establecido un presupuesto fáctico basado en prueba indirecta o indiciaria, siempre que revista ciertos caracteres que otorgue a la decisión la plausibilidad que una condena penal per se exige.

Así el profesor Manuel Miranda Estrampes sostiene que la prueba indiciaria es una actividad intelectual de carácter inferencial llevada a cabo por el juzgador que tiene lugar una vez finalizado el período de práctica de la prueba en el juicio oral, por la cual se afirma un hecho distinto del afirmado por las partes, a causa de un nexo causal o lógico existente entre ambas afirmaciones. Existe prueba indiciaria cuando el objeto de la prueba está constituido por un hecho diferente del que debe ser probado en cuanto jurídicamente relevante para los fines de la aplicación de la norma penal. Señala este autor que si bien nuestro Código Procesal Penal no contiene ninguna referencia a la prueba indiciaria, ello no es obstáculo para su admisión, considerando



además que se trata de un método probatorio y no de un medio de prueba. Lo relevante en la prueba indiciaria no es el número de indicios sino su capacidad indicativa la que está dada por la capacidad de interrelación, concordancia y convergencia de los indicios concurrentes. Sostiene este autor que la utilización de la prueba indiciaria en el proceso penal es perfectamente compatible con el estándar probatorio del más allá de toda duda razonable. La única diferencia sustancial entre la prueba directa y la indiciaria es el número de paso o secuencias inferenciales, pero ello no es obstáculo para poder fundamentar una sentencia condenatoria sobre la base de prueba indiciaria, siendo relevante para ello la solidez y la conclusividad de la inferencia. Los indicios deben ser concordantes entre sí y convergentes hacia una única hipótesis fáctica. (Manuel Miranda Estrampes, Rodrigo Cerda San Martín, Francisco Hermosilla Iriarte, *Práctica de la prueba en el juicio oral*, Editorial Librotecnia, Santiago, 2010, página 346 a 356).

Los profesores Andrés Baytelman y Mauricio Duce comparten esta postura al sostener que *el hecho de que la prueba sea puramente indiciaria, en sí mismo, no disminuye un ápice su fuerza probatoria. La prueba directa no es necesariamente, por ser directa, más fuerte que la prueba indiciaria. Ni viceversa: por el hecho de que una prueba sea indirecta o indiciaria no quiere decir, de ninguna manera, que su fuerza probatoria sea per se menor. Prueba directa y prueba indiciaria imponen exigencias distintas a la argumentación en el alegato final.... Nadie ha dicho que el estándar probatorio –más allá d toda duda razonable- no pueda ser alcanzado, superado y completamente avasallado por la fuerza de prueba puramente indiciaria* (Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2016, páginas 331 y 332)

La doctrina ha asentado cuales son los requisitos que debe tener la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción de inocencia: *pluralidad de indicios o indicio único de especial significación probatoria; que los indicios que se encuentren plenamente acreditados; que se trata de indicios que tengan una conexión directa con el hecho a probar; y que además estén interrelacionados entre sí; racionalidad del enlace existente entre indicio y afirmación presumida; y la necesidad de hacer explícito el razonamiento en la sentencia* (Julio César Cordón Aguilar, Tesis Doctoral Prueba Indiciaria Y Presunción De Inocencia En El Proceso Penal, Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca, 2011, páginas 198 a 250)

En el caso de autos, la prueba ha permitido finalmente tener por acreditada la participación de Mauricio Cruz Cruz, existiendo prueba directa fílmica de la acción desplegada por el sujeto y, respecto de la identidad de éste, la prueba se encuentra compuesta por una serie de indicios, consistentes en que el sujeto que despliega estas acciones registradas en la cámara de seguridad de la Seremía, vestía de una manera determinada, en especial una polera sin mangas blanca, con el tercio superior y capucha negra, con un logo circular, que portaba una mochila amarillo o verde fluorescente, un cinturón blanco, zapatillas con la planta blanca y el talón con cambio de tonalidad, además de sus características morfológicas y una cicatriz o malformación en uno de sus brazos, logrando al efectuar un análisis de fotografías y grabaciones de



manifestaciones en el centro de la ciudad de Concepción con ocasión del “estallido social”, encontrar imágenes que coincidían con la morfología del sujeto y prendas por él utilizadas, logrando determinar las características específicas tanto de la polera –a través de diligencias de análisis comparativos en la web que permitió individualizar el modelo de la misma, lo que fue corroborado por entrevista a uno de los profesores de ésta, además de oficiarse a la entidad fiscalizadora del Ejército de Chile que no mantenía registros,- como de la mochila, -a través de información compartida con miembros de la institución, uno de los cuales la reconoció como aquella que utilizaba una agencia de turismo para sus giras de estudios, American Travel, lo que fue a su turno corroborado por una dependiente de dicha empresa-, por lo que, habiendo logrado individualizar estas prendas distintivas, se le solicitó a personal operativo que si veían a alguna persona portando estas especies, se le hiciera un control de identidad, lo que así ocurrió, pero la persona controlada que mantenía en su poder, en una manifestación, la mochila individualizada, no coincidía su morfología con el sujeto investigado, razón por la cual sólo una vez que se estaban agotando las diligencias se le tomó declaración al testigo individualizado como Mauricio Cruz Torres, al que acompañaron a su domicilio después de la diligencia, momentos en que llegó al lugar su padre, con una polera sin mangas, respecto de quien Cruz Torres había declarado también iba a las marchas y utilizaba la mochila fluorescente, pudiendo observar que mantenía una cicatriz en el brazo de similares características a lo que habían observado en las cámaras de seguridad, por lo que a raíz de lo anterior se convirtió en un sujeto de interés, tomándole fotografías en la vía pública, e investigando si había estado en su lugar de trabajo el 12 y 7 de noviembre, que corresponde al día de los hechos como el día en que se reciben imágenes de la ciudadanía y se captan fotos operativas de un sujeto de similar morfología y polera en una marcha en el centro de Concepción, individualizando a esta persona como Mauricio Cruz Cruz, estableciéndose que, de conformidad a los horarios de entrada y salida registrados en el libro de asistencia laboral de la empresa en que prestaba servicios, no se encontraba trabajando, por lo que es posible situarlo en el lugar de los hechos, procediendo el Lacrim Central a realizar un trabajo técnico a fin de mejorar la calidad de las imágenes de la cámara de seguridad y fotografías del 07.11.2019 y del 02.01.2020 – fecha en que Policía de Investigaciones le sacó fotografías en la vía pública al imputado-, las que le fueron exhibidas a una perito planimétrico de Lacrim Concepción y una médico forense, la doctora Carla Aldana, quienes arribaron a la conclusión que la morfología y la cicatriz eran similares, corroborando asimismo a través de una ficha de Genchi que Cruz Cruz, quien aparecía con antecedentes penales en la base del Registro Civil, mantenía una cicatriz en el brazo y tatuajes, con lo que se logró obtener una orden de detención y entrada y registro al domicilio, materializándose ésta, incautando desde el domicilio del imputado la polera y mochila que se había logrado establecer eran las de las imágenes del día de los hechos, un cinturón blanco, unas zapatillas de similares características a las registradas en el video del día de los hechos, además de un buzo negro con rayas blancas y un anillo que portaba el sujeto que había sido captado en



fotografías del 07.11.2019, estableciéndose así, mediante los diversos medios de prueba que fueron explicados en su oportunidad, como la declaración de testigos, información aportada por ellos de las conclusiones a las que arribó una perito y una profesional médico legista, prueba gráfica y documental, que están directamente relacionados y concatenados entre sí, que la persona que aparecía en el video de la Seremía desplegando la acción ya descrita correspondía a Mauricio Cruz Cruz. Todos estos indicios han sido relacionados según lo explicado mediante un razonamiento lógico de este Tribunal, apegado a la sana crítica, permitiendo derribar la presunción de inocencia que ampara al sentenciado, formando la convicción, más allá de toda duda razonable, acerca de su participación culpable en los hechos que se tuvieron por acreditados.

**DECIMOQUINTO: Audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal.** Que, el Ministerio Público señala que atendido el grado de desarrollo, la circunstancia agravante que se tuvo por configurada, solicita por el delito condenado la pena de cuatro (4) años de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales y costas de la causa, incorporando mediante lectura resumida extracto de filiación y antecedentes del condenado que registra como anotaciones causa Rol N°11.447 del Tercer Juzgado del Crimen de Talcahuano en que con fecha 25.06.1999 se le condenó por el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, con reclusión nocturna, pena cumplida con fecha 03.12.2003, y causa Rit N°6.552-2012 del Juzgado de Garantía de Talcahuano por una falta penal.

El Consejo de Defensa del Estado manifiesta que solicita la pena de cinco (5) años, más accesorias legales, atendido el delito y el grado desarrollo del mismo.

La Delegación Presidencial solicita la pena de cinco (5) años por estimar que es la que le corresponde.

La Defensa pide que, encontrándonos en el rango de pena de presidio menor en su grado máximo, esto es de 3 años y un día a 5 años, se le aplique el mínimo de la pena sin perjuicio de la agravante que se tuvo por configurada, toda vez que solicita se tenga por configurada la atenuante de colaboración sustancial porque, a pesar de no haber rendido declaración su representado durante el transcurso investigación, una vez detenido estuvo dispuesto colaborar con la diligencia de toma fotografías que fueron objeto de pericia y que además la evidencia ha sido ocupada como prueba para que el Tribunal haya llegado a este veredicto y, en base a la compensación racional de ambas circunstancias modificatorias, solicita en el mínimo de la pena. En cuanto a la forma de cumplimiento, consta en el extracto incorporado que la última anotación que data de 2012 es una falta y la anterior es del sistema antiguo, por lo que ambas estarían prescritas para los efectos de la concesión de penas sustitutivas, por lo que permitiéndolo el rango de pena, solicita Libertad Vigilada, para lo cual cuenta con una pericia socioeconómica que se le hizo a Mauricio Cruz Cruz cuando estuvo privado de libertad al comienzo de esta causa, la que se acompañó a la revisión de la cautelar



respectiva, en que dentro de su situación económica vulnerable le ha costado tener un contrato de trabajo permanente, habiéndose acreditado durante la investigación que trabajó en una empresa de aseo, que está a cargo de sus dos hijos con quienes tenía domicilio en calle Nápoles 2633 Población Alarcón del Campo en Hualpén, lugar desde donde tuvo que salir y actualmente vive en situación de toma con su hija, haciendo trabajos esporádicos, estimando que la posibilidad de cumplimiento a través de la Libertad Vigilada lo va a disuadir de cometer nuevos ilícitos, solicitando esta posibilidad de cumplimiento con fines resocializadores; agregando que el informe que acompaña concluye que el condenado presenta una actitud pro social sin apreciarse una tendencia a favor de los ilícitos, se suma una actitud favorable hacia las normas y convenciones sociales desde ese punto de vista, muestra una actitud positiva hacia la intervención y /o supervisión profesional; logra reportar pares de tipo pro social y desarrolla un juicio crítico respecto de la conducta criminal (no se identifica con el crimen); es capaz de identificar riesgos y generar algunas estrategias de autocuidado; logra problematizar su actual situación observándose disposición al cambio y una narrativa de desistimiento asociada a factores evolutivos y su proyecto de vida prosocial; a pesar de lo anterior, se evalúa necesario intervenir factores de riesgo como consumo problemático de alcohol y adecuada estructuración del tiempo libre, destacando que el imputado logra problematizar su consumo de alcohol, informe que suscribe la profesional Issi Palma Isla, Asistente Social, de fecha 25.09.2020, indicando que el mismo acompaña carta de recomendación de Preserva Limitada en que aparece prestando servicios desde 1.1.2018 a 1.6.2020, certificado de residencia Junta de Vecinos Las Golondrinas N°27 donde acreditaba domicilio en esa fecha, contrato de trabajo Preserva, certificado de estudios 7mo y 8vo básico, solicitando tener por justificados los elementos subjetivos que exige la norma, por lo que, atendido el rango de la pena a imponer y el cumplimiento de los elementos subjetivos, reitera su solicitud de pena sustitutiva como forma de cumplimiento, agregando que asimismo solicita se abone el tiempo que ha permanecido privado de libertad en la presente causa y sometidos a medidas cautelares.

Dado traslado al Ministerio Público, este señala que las condenas invocadas para efectos de penas sustitutivas al tenor del artículo primero de dicha norma no deben considerarse, pero que si bien la Defensora solicitó la Libertad Vigilada, estima que la pena sustitutiva que corresponde es la Libertad Vigilada Intensiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 bis, atendida las penas solicitadas y, conteste con lo mismo, solicita la aplicación de la condición especial dispuesta en el artículo 17 ter b), esto es prohibición de concurrir al edificio de la Delegación Presidencial, además de la incorporación de la huella genética atendido el ilícito, lo que fue así solicitado en la acusación; el Consejo de Defensa del Estado insiste en el quantum de pena, toda vez que entiende que existe esta compensación racional si se acoge la atenuante y estima que la forma de cumplimiento es la Libertad Vigilada Intensiva, solicitando la misma condición especial que el Ministerio Público y la incorporación de la huella genética por la naturaleza del delito; la Delegación





Presidencial insta por la pena sustitutiva de Libertad Vigilada Intensiva, la aplicación del artículo 17 ter e incorporación de la huella genética solicitados. Haciendo uso de igual derecho, la Defensa indica que le interesa sea concedida la Libertad Vigilada, no haciendo oposición a que sea la Libertad Vigilada Intensiva, sin oponerse a la condición especial ni a la incorporación de huella genética que fueron solicitadas por los acusadores.

**DECIMOSEXTO: *Circunstancias Modificadoras.***

1.- Agravantes: Que respecto de la circunstancia agravante del artículo 12 N°10 del Código Penal, esto es cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia, como ya se dejó establecido en el considerando décimo, el delito se cometió durante y a propósito del denominado “estallido social” ocurrido en nuestro país en los meses de octubre y noviembre de 2019, periodo en el que se produjeron diversas protestas de la ciudad, quedando además demostrado de conformidad a la Documental y Otros Medios de Prueba N°2 del Auto de Apertura consistente en un cd con evidencia NUE 5953355 correspondiente a) un video del perfil público de Facebook “El reportero del pueblo” y b) <https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/11/12multitudinaria-marcha-nuevamente-desbordo-las-calles-de-concepcion.html>, las circunstancias en las que Cruz Cruz ingresa a las oficinas de la Seremía de Bienes Nacionales a desplegar el delito que se tuvo por configurado, circunstancia conocida por el acusado, quien se encontraba en el lugar al ocurrir aquello, según se pudo observar en el segundo video antes individualizado en el segundo 7, por lo que, de esta manera, resulta evidente que la conducta del acusado se ejecuta con ocasión de esta conmoción popular, razones por las que se tendrá por configurada dicha agravante.

2.- Atenuantes: Que respecto de la circunstancia atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal solicitada por la Defensa del acusado, esto es su colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, fundada en que si bien éste no declara en estrados, atendida su voluntariedad en la toma de fotografías de su cara y cuerpo al momento de su detención, según lo declarado por funcionarios de la Policía de Investigaciones en estrados debería reconocérsele, debe primero señalarse que no es efectivo que las mismas hayan sido utilizadas para realizar diligencias comparativas con las fotografías que fueron obtenidas durante el proceso investigativo, toda vez que, según se razonó respecto de la ponderación de prueba en cuanto a la participación del acusado, las utilizadas para efectos de llevar a cabo las diligencias realizadas con la perito planimétrico y la doctora Carla Aldana fueron fotos captadas desde las filmaciones del 12 de noviembre de 2019, del 07 de noviembre y del 02 de enero de 2020, esto es, no fueron usadas en los términos señalados por este interviniente.

Y, en segundo término, si bien se podría estimar que Mauricio Cruz Cruz colaboró con la diligencia que le fue solicitada al momento de su detención, esto es la captura de imágenes de su persona, dicho registro gráfico no configura ningún tipo de



indicio pues al momento de su detención y autorización éste ya había sido logrado identificar, lo que permite concluir que dicha colaboración en caso alguno cumple con el requisito de sustancialidad que exige la norma, razón por la que deberá ser rechazada.

**DECIMOSÉPTIMO: *Determinación de Pena.*** Que en lo que dice relación a la pena a imponer, siendo la pena asignada al delito en cuestión la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, encontrándose en grado de desarrollo de frustrado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Código Penal, se rebajará la pena en un grado, quedando asentada en la de presidio menor en su grado máximo, por lo que concurriendo una circunstancia agravante de responsabilidad penal sin que concurra ninguna atenuante, de conformidad lo dispone el artículo 67 del código punitivo, el Tribunal aplicará la pena en su máximo y, de conformidad a lo señalado en el artículo 69 de la misma norma, sancionará al acusado con el mínimo de éste, atendidas las modificatorias de responsabilidad concurrentes y a la menor extensión del mal producido por el delito, que no es otro que el previsto en la norma.

**DECIMOCTAVO: *Forma de Cumplimiento.*** Que atendido que se dan los requisitos objetivos así como los subjetivos, de conformidad al peritaje y documentos incorporados por la Defensa, como asimismo los antecedentes investigativos incorporados en juicio en cuanto a que el condenado al momento de los hechos mantenía un trabajo, antecedentes que no fueron controvertidos por los acusadores, dándose los presupuestos legales para ello, se procederá a conceder a Mauricio Cruz Cruz la pena sustitutiva de Libertad Vigilada Intensiva, que es la que corresponde en atención a la extensión de la pena a imponer, debiendo dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el artículo 17 y 17 ter b) de la Ley N°18.216, esta última consistente en la prohibición de acercarse a las oficinas de la Delegación Presidencial de Concepción, en que se albergan oficinas de la Seremía de Bienes Nacionales.

**DECIMONOVENO: *Huella Genética.*** De conformidad con lo establecido en el artículo 17 a) de la Ley N°19.970, inclúyase en el Registro de Condenados la huella genética del sentenciado.

**VIGÉSIMO: *Costas.*** Que no habiendo resultado completamente vencido el acusado, como asimismo habiendo tenido el Ministerio Público y las acusadoras motivos plausibles para litigar, cada parte pagará sus costas.

**VIGÉSIMO PRIMERO: *Decisión sobre la acción civil.***

1º Que, conforme a lo prevenido en el artículo 59 inciso 2º del Código Procesal Penal “durante la tramitación del procedimiento penal la víctima podrá deducir respecto del imputado, con arreglo a las prescripciones de este Código, todas las restantes acciones que tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho



punible. La víctima podrá también ejercer esas acciones civiles ante el tribunal civil correspondiente”.

De la norma precedentemente transcrita se colige que el ofendido por el delito, cuando se trata del ejercicio de la pretensión indemnizatoria civil que ostenta en contra del imputado, tiene dos posibilidades: la primera, ejercer durante la tramitación del proceso penal todas las acciones –cuyo sujeto activo sea la víctima y cuyo sujeto pasivo corresponda al imputado, salvo el caso de la acción restitutoria- que tuvieran por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible, o bien ejercer esas acciones civiles ante el tribunal civil correspondiente.

2° Que el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, interpuso oportunamente demanda civil de indemnización de perjuicios, en contra de Mauricio Antonio Cruz Cruz, ya individualizado, para que en definitiva sea condenado a pagar la suma de \$102.883.526, correspondiente a la pérdida causada al Fisco de Chile por su actuar delictivo, en subsidio, la suma que a fije el Tribunal, reajuste de la cantidad indicada conforme a la variación del IPC entre las fechas de la comisión del ilícito referido y la fecha del pago efectivo y total, en subsidio, entre las fechas que se estime pertinente, intereses corrientes sobre la suma señalada reajustada conforme lo señalado, calculados entre la fecha en que se requiera el cumplimiento de la sentencia y la fecha del pago efectivo y total y las costas de la causa.

La Defensa del demandado, solicitó el rechazo de la acción civil en atención a que no sería responsable de los daños provocados.

3° Que el artículo 2314 del Código Civil establece que, el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.

La responsabilidad extracontractual surge, entonces, a partir de la comisión de un hecho constitutivo de un ilícito y concurriendo, además, las exigencias de capacidad del demandado, culpa o dolo en el agente, daño causado y la necesaria relación de causalidad entre la culpa o dolo y el daño inferido.

Fluye, por tanto, que uno de los requisitos esenciales de la responsabilidad aquiliana es la existencia del daño, pues, según se ha dicho reiteradamente por la doctrina y jurisprudencia, “sin daño no hay responsabilidad civil”.

4° Que, previo a entrar al análisis de la cuestión planteada, conviene dejar establecido que en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, si bien el debate y la prueba de la acción civil se sujetan –salvo en lo tocante al onus probandi- a las disposiciones del Código Procesal Penal, la decisión o resolución del asunto se rige por las leyes sustantivas civiles pertinentes, esto es, por los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

5° Que, en consecuencia, corresponde a su respecto, decidir si concurren o no las exigencias legales que hacen procedente la responsabilidad extracontractual reclamada por el actor civil.

6° Que, no habiéndose probado que la acción desplegada por el demandado haya ocasionado daño a otro de la forma señalada por la demandante civil, el que se intentó



acreditar mediante la prueba documental propia rendida por el Consejo de Defensa del Estado, correspondiente a Ord.: N°SE08-410-2020, que establece que se generaron gastos por daños y otras necesidades derivadas de la contingencia social, atendido el grado de desarrollo del ilícito por el que fue condenado (en el caso sublite de incendio frustrado), siendo necesaria la relación de causalidad entre la culpa o dolo y el daño inferido una de las exigencias legales de la responsabilidad reclamada, la acción de indemnización de perjuicio no puede prosperar.

7° Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de una conducta constitutiva de delito que haya irrogado el daño que alega la demandante, no es posible hacerlo responder –en lo civil- por una acción que no generó daño, razón por la cual se rechazará la demanda interpuesta.

Por estas consideraciones y, de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 1°, 12 N°10, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 21, 24, 25, 29, 31, 47, 49, 50, 67, 69, 70, 476 N°2 del Código Penal; artículos 1°, 4°, 36, 45, 46, 47, 59, 281, 295, 296, 297, 309, 325, 326, 328, 329, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal, artículos 1437, 1698, 2314, 2329 del Código Civil, artículo 14 y siguientes de la Ley N°18.216 e Instrucciones del Pleno de la Excm. Corte Suprema sobre la forma y contenido de las sentencias dictadas por los Tribunales de la Reforma Procesal Penal, se declara:

#### **A) EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL**

**I.-** Que se **ABSUELVE** a **MAURICIO ANTONIO CRUZ CRUZ**, cédula de identidad N°11.984.982-9 de los cargos formulados en su contra, en calidad de autor del delito de Desórdenes Públicos, previsto y sancionado en el artículo 269 del Código Penal que en grado de consumado se le atribuyó haber cometido el día 12 de noviembre de 2019 en la comuna de Concepción.

**II.-** Que se **CONDENA** a **MAURICIO ANTONIO CRUZ CRUZ**, cédula de identidad N°11.984.982-9, ya individualizado, a la pena de **Cuatro años y un día** (4,1) de Presidio Menor en su Grado Máximo y a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito de Incendio, en grado de frustrado, previsto y sancionado en el artículo 476 N°2 del Código Penal en relación con el artículo 7 inciso 2° del mismo cuerpo legal, cometido en la comuna de Concepción el 12 de noviembre de 2019.

**III.-** Que, reuniéndose los requisitos del artículo 15 bis de la Ley N°18.216, se le sustituye al sentenciado el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la pena de **Libertad Vigilada Intensiva** por el término de cuatro años y un día, debiendo, además, cumplir durante el período de control con el plan individual que se aprobará en su momento y con las condiciones legales de las letras a), b) y c) del artículo 17 y de la letra b) del artículo 17 ter de la citada ley de conformidad a lo razonado en el motivo decimoctavo.



Corresponderá a Gendarmería de Chile ejecutar, controlar e informar el cumplimiento de la pena sustitutiva impuesta, debiendo para tales efectos el sentenciado presentarse a dicha institución dentro del plazo de cinco días, contados desde que estuviere firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra.

Ofíciase a Gendarmería de Chile, comunicando la pena sustitutiva impuesta, como asimismo para que en el plazo de cuarenta y cinco días contados desde que el sentenciado se presente a dicha institución, elabore un plan de intervención individual, el cual deberá ser puesto en conocimiento del Tribunal para su aprobación en audiencia que se deberá realizar al efecto.

Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada, el sentenciado cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas. En su caso, se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose a su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva, como también se le tendrá como abonos novecientos setenta y siete (977) días, correspondiente al período que permaneció privado de libertad en esta causa, en calidad de detenido y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva y arresto total sin que se hayan controvertido estos tiempos por los intervinientes en la audiencia de estilo, y que van entre el 29 de junio de 2020 al 14 de diciembre de 2020 (169 días), posteriormente sometido a la medida cautelar de arresto parcial desde el 14 de diciembre de 2020 al 28 de julio de 2023 (957 días), detenido desde el 29 al 30 de julio de 2020 (1 día) y nuevamente arresto parcial entre el 30 de julio de 2023 al 07 de abril de 2024 (253 días), según el mérito del auto de apertura y el certificado de la Jefa de Causa de este Tribunal, sin perjuicio de mejores antecedentes con que pudiere contar el Juez de Garantía competente.

**IV.-** Que cada parte pagará sus costas de conformidad a lo razonado en el considerando vigésimo del presente fallo.

**B) EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL.**

**V.** Que se rechaza la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco de Chile en contra del demandado Mauricio Antonio Cruz Cruz, sin costas.

Acordada con la prevención de la magistrado Ubilla Carvajal quien estuvo por reconocer sólo un total de abonos de novecientos cuarenta y siete (947) días, toda vez que debe procederse al descuento de los períodos de incumplimiento informados (17 días), según consta en sistema digital, y el tiempo en que no fue posible controlar el cumplimiento de la cautelar de arresto nocturno impuesta, ya que desde el 06.03.2024, en audiencia, el sentenciado informa se encuentra en situación de calle, sin fijar un domicilio para efectos del control de la medida cautelar de arresto nocturno, situación que se mantuvo durante la audiencia de juicio oral en que manifestó estar en situación de toma solicitando su notificación vía teléfono celular, sin



que a la fecha haya proporcionado un domicilio para cumplir y proceder a controlar el arresto decretado en su oportunidad.

Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal.

Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970, sobre registro de ADN, respecto del sentenciado.

Ofíciase, en su oportunidad, a los organismos que corresponda para comunicar lo resuelto y remítanse los antecedentes necesarios al señor Juez de Garantía de Concepción.

Devuélvase la prueba incorporada por los intervinientes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la Juez Milena Andrea Ubilla Carvajal.

RIT N°142-2023

RUC N°1901233211-7

Pronunciada por las Juezas Titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, doña **MARÍA PAULINA GARCÍA SOTO**, doña **CARMEN GLORIA DURÁN VERGARA** y doña **MILENA ANDREA UBILLA CARVAJAL**.







Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XLLRXMBWXX